

MANUEL ANTONIO GARRETÓN
TOMÁS MOULIAN

LA UNIDAD POPULAR Y EL CONFLICTO POLÍTICO EN CHILE

"Este libro habla de un período crucial en la historia de Chile. No para revivir odios, señalar culpabilidades o encerrarse en la nostalgia restauradora de un pasado que ya no vuelve. Sino para intentar recuperar un juicio histórico equilibrado y contribuir así a haceremos justicia como pueblo y como nación."

Se publicó por primera vez en Chile, a los diez años del término de la Unidad Popular. Hoy se publica a los veinte años de ese evento con nuevos análisis de sus autores. Más que una descripción y evaluación global del período, el libro se concentra en el análisis de una de sus dimensiones: el desarrollo de la lucha política.

LA UNIDAD POPULAR Y EL CONFLICTO POLÍTICO EN CHILE
M. A. Garretón / T. Moulian

LOM

EDICIONES CESOC-LOM





SEGUNDA FASE: DEL ACCESO AL GOBIERNO A LA CRISIS DE OCTUBRE. (Noviembre 1970 a Septiembre 1972).

1. DEL ACCESO AL GOBIERNO A LAS ELECCIONES MUNICIPALES. (Noviembre de 1970 a abril de 1971).

La coyuntura que comienza con el acceso de Allende al Gobierno y que termina con las elecciones de regidores, en abril de 1971, es la primera coyuntura del periodo de Gobierno. Ella plantea problemas metodológicos de carácter descriptivo y analítico que no presentaba la coyuntura anterior.

Esa coyuntura previa se caracterizaba, como se ha dicho, porque había una unidad de problemática que aparece directamente.

Las otras coyunturas presentan, al contrario, una diversidad de problemáticas. Esto nos obliga a utilizar una operatoria descriptiva distinta. En vez de tomar como unidad de descripción una unidad tiempo, el momento de la coyuntura, deberemos tomar los acontecimientos donde se expresaban determinadas problemáticas. La utilización de cortes temporales intracoyunturales, no nos servirá como recurso descriptivo, sino como recurso analítico.

El relato de los acontecimientos estará necesariamente disminuido. Nuestro intento será exclusivamente captar la significación de ellos, desde la perspectiva de una lectura sobre el significado de la coyuntura.

Los acontecimientos políticos más significativos de esta coyuntura son: 1) la agitación agraria; 2) la puesta en marcha de una determinada estrategia para el cambio de las estructuras económicas y los problemas políticos que ello suscitó respecto a la compra de acciones bancarias y respecto a las requisiciones y expropiaciones de industrias; 3) los conflictos que se suscitaron a propósito de problemas judiciales; 4) el comienzo de la discusión respecto a la nacionalización del cobre; 5) la temática de la sedición, planteada a propósito de la negativa de desafuero a un senador opositor por la Corte Suprema y a propósito del llamado affaire del cobre, y 6) la preparación y realización de las elecciones municipales de abril.

La agitación agraria en las provincias del Sur y en particular en Cautín, es uno de los principales problemas políticos del período, no tanto por la importancia cuantitativa que tiene, sino por las problemáticas que en torno a ella se plantean. El análisis de ese acontecimiento permite visualizar la estrategia de las diferentes fuerzas opositoras respecto al Gobierno y el modo como éste ha resuelto enfrentar determinados problemas.

Cada una de las fuerzas hace una lectura diferente de la ola de tomas y de los enfrentamientos entre campesinos, mapuches y propietarios, que se escalonan desde diciembre de 1970 hasta marzo de 1971.

Una de las lecturas proviene de las organizaciones patronales. Ellas se esfuerzan por definir el problema desde un punto de vista estrictamente gremial, evitando ser arrastrados a un juicio político global respecto al Gobierno. La intención de su acción es evitar una radicalización de la política agraria del Gobierno. Luchan por obtener, sobre la base de la negociación, un espacio para la agricultura privada dentro de una sociedad que vive un proceso de profundas transformaciones. Esta posición de las organizaciones patronales implica una profunda ruptura con los comportamientos desarrollados durante el gobierno de Frei. Esta ruptura es tematizada, al principio de la

coyuntura como si el cambio de Gobierno significara el paso de una Reforma Agraria demagógica e impulsada por motivos políticos a una Reforma Agraria técnica y planificada.

Para realizar esta modificación de sus comportamientos y análisis previos, las organizaciones patronales agrícolas deben transformar sustancialmente el discurso y la práctica corporativa frente a la Reforma Agraria, asumiéndola como un cambio necesario.

Su énfasis se traslada de la reivindicación del derecho de propiedad, de la movilización contra las expropiaciones consideradas en sí como expropiatorias, a la defensa de la aplicación legal y planificada de la Reforma Agraria. La temática de la fijación rápida de las reglas del juego donde se indique el espacio de la agricultura privada dentro de un sistema agrícola con predominio del sector socializado, no se formula a nombre de la justicia o de derechos naturales que deberían ser inalienables, sino desde el punto de vista de la eficacia del sistema agrícola.

Esa línea de conducta, mantenida en un momento en que recrudescen las tomas de predios, reproduce la escisión entre las organizaciones patronales y la DC, aún cuando ésta aparece en este momento como la principal fuerza política de la Oposición. El intento por parte de los gremios patronales de defender los intereses corporativos más esenciales -como son la supervivencia en cuanto clase de productores agrícolas- desterrando la perspectiva conservadora y asumiendo una perspectiva nacional, entra en contradicción con los intereses políticos de la DC.

Para esta organización, más aún que para la Izquierda, por la posición gobernante de ésta, todos los acontecimientos de la coyuntura tienen una determinación de corto plazo que se inscribe en una de largo plazo. En el caso de la DC el objeto de largo plazo es convertirse en la única alternativa de oposición al Gobierno de Allende. Para el logro de esta meta mediana

requiere consolidarse durante las elecciones de abril como la principal fuerza política, no sólo de la Oposición, sino del país.

Así, el problema de la agitación agraria está inserto para la DC dentro de la problemática política global. No le interesa desde la perspectiva de los patrones amenazados, como un problema corporativo o gremial. La línea de la DC respecto al problema agrario tiene dos aspectos simultáneos. Primero, agita ese problema para aglutinar en torno a sí las fuerzas opositoras. Segundo, busca presionar al Gobierno para mantenerlo dentro de límites legales. La estrategia de la DC durante esa coyuntura, y también durante la mayor parte del periodo, es tratar de acotar la acción del Gobierno, puesto que la radicalización de su acción permite la recuperación política de los sectores más conservadores. La posibilidad para la DC de ser ella la alternativa de Oposición requiere que el Gobierno mantenga su acción dentro de los límites negociados en el Estatuto de Garantías. Esa negociación simboliza para la DC su capacidad para resolver democráticamente los conflictos planteados por el triunfo electoral de la Izquierda.

Pero al mismo tiempo, la DC debe enfrentar el problema agrario desde otro punto de vista, la mantención de su base social campesina en una situación en que se intensifican las demandas y las movilizaciones espontáneas por la tierra.

Para la UP y para el Gobierno el recrudecimiento de las tomas de predios, que en realidad habían comenzado el último año del Gobierno de Frei, implican una serie de problemas políticos que están en relación con sus propios intereses como coalición gobernante y con las temáticas que la Oposición plantea a propósito del proceso.

El principal problema se expresa en el conflicto entre la necesidad de mantención del orden que toda fuerza gobernante enfrenta, exigido por la Oposición política y por las organizaciones patronales, y la necesidad de respetar la racionalidad

de lo popular. Esta última lógica se expresa en varias dimensiones: el reconocimiento del carácter justo de muchas de las tomas o de las acciones campesinas ilegales, una cierta sacralización de la acción de las masas puesto que ellas expresan tendencias revolucionarias, y por último, el rechazo a utilizar la represión contra los asalariados. En esa problemática está presente una de las tendencias más características del Gobierno, el sentirse representante de las clases hasta entonces explotadas, encargado de restaurar en sus actos viejas injusticias y desigualdades.

Ante esto, la Oposición desarrolla la temática del desorden y de la autoridad sobrepasada y trata de obligar al Gobierno a acciones más enérgicas. Este responde en un doble plano.

Primero, indicando que la política de persuasión es la única que puede permitir resolver el problema. La represión minaría la confianza en la acción gubernativa de esos sectores movi- lizados y radicalizados, multiplicando la posibilidad de ex- plusiones espontáneas. Segundo, indicando que en gran parte del comportamiento de los campesinos estaba determinado por la violencia y la injusticia de los patrones.

En el curso del conflicto, las fuerzas identificaron de dife- rentes modos a los responsables. Sin embargo, creemos que la importancia que adquirieron las tomas de fundos durante la coyuntura, y durante la mayor parte del periodo, es la resultante de un doble hecho. Por una parte, revelaba la influencia que podía adquirir, en este caso entre los sectores campesinos, una estrategia que actuaba para desarrollar un poder de masas que impulsiera al Gobierno el ritmo de la Reforma Agraria. Por otra parte, esta sucesión de tomas, reiteradamente condenada por el Gobierno porque lo ponía en un impasse político durante un periodo electoral, revelaba la existencia de poderosos fermen- tos de movilización disponibles. Algunas de las tomas fueron evidentemente organizadas por sectores que respondían a una estrategia de extrema Izquierda, a la cual se sumaban sectores

de la UP. Pero otras fueron generadas respondiendo a necesi- dades percibidas autónomamente. Es evidente que tras esos comportamientos existía la conciencia de realizar un derecho.

El Gobierno estaba sometido a una triple presión, la presión de la DC a través de la tesis de la autoridad sobrepasada, la de los gremios patronales que buscaban un espacio para la iniciativa privada en la agricultura y la de los campesinos movlizados tras la tierra.

Enfrentado a estas exigencias contradictorias en pleno pe- riodo electoral, el Gobierno actúa de un modo que será prototípico: Transforma las tomas en un medio de aceleración de la Reforma Agraria, utiliza la persuasión frente a los cam- pesinos sin tierrás y emplea la legislación de represión de los delitos políticos frente a la violencia de los latifundistas. Su respuesta global fue la masificación de la Reforma Agraria en las provincias convulsionadas y la definición de reglas del juego donde se le asignaba un rol mínimo y precario a los agricultores privados.

De ese modo fracasán tanto la táctica de la DC consistente en transformar el problema agrario en un elemento movilizador para obligar al Gobierno a situarse en un ámbito donde debía negociar con la única fuerza política disponible, como la táctica de los gremios patronales consistente en buscar la mode- ración de las transformaciones basándose en la idea que el Gobierno deseaba ampliar el consenso.

Enfrentado en pleno periodo electoral, momento donde podía haberse sentido empujado a buscar un apoyo ampliado, a las primeras alternativas importantes, el Gobierno eligió una política definida como de clase, lo que también implicaba una estrategia electoral.

El segundo conflicto político importante de esta fase se suscita por las compras de acciones bancarias, con el propósito

de estatizar la banca privada, y a consecuencia de las intervenciones y requisiciones de empresas.

En ese terreno, el camino elegido por el Gobierno es el de adecuarse a posibilidades abiertas por una legislación heterogénea y confusa para realizar su vasta política de transformaciones económicas, cuyo elemento central era la destrucción de la estructura monopólica privada y la construcción de lo que denominó Área de Propiedad Social (APS). Así, comenzó a utilizar viejas cláusulas legales que le otorgaban insospechados poderes. Este recurso, que la Oposición tematiza como legalidad sobrepasada, ya desde esta coyuntura, era evidentemente legal en su forma. Pero también era evidente que su uso generalizado alteraba el equilibrio entre los poderes del Estado, privilegiando los del Ejecutivo y cuestionando así el principio que permitía la articulación de los intereses dominantes dentro del sistema político. De nuevo esta coyuntura tiene un carácter prototípico pues en ella se viven, al principio bajo la forma de la sorpresa, los conflictos típicos del período.

La primera requisición del Gobierno, la fábrica textil Bellavista Tomé, es acogida con beneplácito por todos los sectores, cuando Allende la anuncia en una visita a Concepción. Los motivos que justificaban la medida eran la paralización y abandono de la industria por parte de los empresarios. Es evidente que en ese momento no se piensa que la cláusula invocada servirá como fórmula general.

Sin embargo, la aceptación de estas medidas expropiatorias por parte, por ejemplo, del principal diario ligado a los grandes intereses económicos, El Mercurio, son reveladoras del estado ideológico de las clases amenazadas en sus intereses económicos y de sus representantes políticos tradicionales, en los primeros momentos del Gobierno de Allende.

En esa aceptación resignada, y apenas reticente, se pone en evidencia el mismo tipo de táctica de los gremios agrarios. El

análisis que hacen sobre la expropiación de Bellavista Tomé distingue entre el empresario que se atiene a la ley, que hace funcionar la industria y que colabora con la tarea nacional de producir, de aquél que, acicateado por el pánico, deja todo abandonado. En ese razonamiento hay una lógica común con el de los agrarios. El objetivo aparente es defender la iniciativa privada y no a los capitalistas o latifundistas individuales.

La reacción es, sin embargo, muy distinta frente al procedimiento para la compra estatal de las acciones bancarias. Mientras que las expropiaciones o requisiciones de algunas industrias, aduciendo decretos no derogados de 1932, podrían ser vistas como recurso de excepción que se justificaba por motivos nacionales, el procedimiento de estatización bancaria revela una estrategia general.

En este terreno se produce una escisión entre los intentos de la DC de generar una movilización en contra del procedimiento extraparlamentario usado para la estatización bancaria y el comportamiento de los grandes accionistas, que, empujados por las ventajas de la proposición gubernamental y temerosos de un endurecimiento posterior, empiezan a vender sus acciones en grandes cantidades.

En todo caso, durante la coyuntura estudiada, el problema de la estrategia de transformación económica se plantea todavía en forma preliminar.

El tercer problema político importante de la coyuntura es el comienzo del proceso de nacionalización de la gran minería del cobre (10). La importancia de este acontecimiento, que finalmente derivará en una fórmula de consenso, es que las primeras

(10) El proyecto de Reforma Constitucional sobre la nacionalización del cobre fue presentado por el Ejecutivo el 19 de Enero de 1971. Tuvo un tiempo

proposiciones gubernamentales son recibidas con extraordinaria reticencia por la DC.

Para esta organización política el proyecto enviado a la discusión parlamentaria revelaba un estilo, puesto que hacia tabla rasa de la política de chilениzación emprendida por el Gobierno de Frei. La DC ve en esta actitud un comportamiento sectario y dogmático y una negación de la política del consenso. Ella otorga a su oposición al proyecto enviado un cariz populista. No sólo lo critica desde el punto de vista de la defensa histórica del Gobierno de Frei, sino también invocando el nombre de las organizaciones gremiales cupríferas, cuyos derechos adquiridos serían amenazados por las ambigüedades del proyecto. Es ese otro intento de generarle contradicciones al Gobierno en el campo de lo popular. Esa misma línea es usada entre los campesinos, denunciando presuntos planes de estatización de la tierra, y entre los bancarios proponiendo la propiedad de los trabajadores como alternativa de la estatización. Sin embargo, en esa coyuntura, esos intentos se muestran prematuros.

Otro de los conflictos políticos del periodo, que también tiene un carácter premonitorio, son los enfrentamientos entre el Gobierno y la UP y el Poder Judicial. En el curso de esta coyuntura, esos enfrentamientos se desencadenan a propósito de tres acontecimientos.

de tramitación de seis meses. Las principales modificaciones introducidas en la discusión parlamentaria tuvieron relación con la validez de los contratos leyes, negociados por la Administración Frei para realizar su política de chilениzación con la composición del Tribunal Especial del cobre, encargada de fijar el monto de las indemnizaciones y con los derechos de los conaseccionarios de las mismas. Para conocer la trayectoria parlamentaria de los más importantes proyectos de ley o reformas constitucionales durante el periodo: Francisco Cumpido, «Proyectos legislativos e institucionalidad jurídica 1964-1973» (op. cit.).

Uno de ellos es el rechazo, por parte de la Corte Suprema, de la inhabilitación de un senador derechista que el Fiscal Militar suponía implicado en el asesinato del General Schneider. Ese suceso desencadenó una violenta campaña de la UP contra el carácter clasista del Poder Judicial. El segundo punto de fricción es el Proyecto de Tribunales Vecinales, enviado por el Gobierno al Parlamento, cuyo objeto era crear tribunales elegidos por sufragio universal que conocerían causas de menor cuantía. Este Proyecto fue retirado posteriormente de la discusión parlamentaria, a causa de la oposición política y del Poder Judicial. El tercer acontecimiento es el discurso del Presidente de la Corte Suprema, al inaugurar el Año Judicial 1971, donde defendía a la justicia de las críticas recibidas, negaba su carácter clasista y trataba de demostrar su apertura a una política de cambios; pero el centro político del discurso fue el cuestionamiento del Proyecto de Tribunales Vecinales.

Evidentemente que esa intervención política del Poder Judicial habría merecido, en condiciones normales, una crítica unánime. Sin embargo, la intensidad de la lucha política de la coyuntura hace que el discurso fuera recuperado por la Oposición en general y en particular por la DC. Esta analiza el discurso como un acto de legítima defensa, insinuando sólo de pasada los inconvenientes de un pronunciamiento político del Poder Judicial.

Este hecho es revelador del clima político de la coyuntura. La intensidad que cobran los enfrentamientos, evidentemente determinada por la expectativa electoral, produce una polarización artificiosa, que no corresponde a una polarización real, -la Oposición estaba profundamente dividida-, pero que impide cualquier entendimiento racional en torno a los proyectos del Gobierno. En ese clima se desarrolla, por ejemplo el análisis de los Tribunales Vecinales. La fuerte politización de la coyuntura le impide a la DC descubrir en ese proyecto una continuación de su política respecto a la marginalidad. Lo

analiza, más bien, en una hipótesis paranoica como si allí se presagiara una institución de la dictadura del proletariado.

El tema de la sedición es también demostrativo de este clima. Ella se convierte en una temática del Gobierno y de la UP desde el principio del período. Quizás justamente por ello perdió fuerza posteriormente como consigna de movilización. Durante esta coyuntura este tema empieza a constituirse a propósito de tres hechos. En primer lugar las declaraciones del Senador Morales Adriaola, el cual había estado sujeto al proceso de inhabilitación mencionado. Esas declaraciones son un llamado a la unidad nacional contra el Gobierno y no un llamado a la acción extra-legal, aunque evidentemente el carácter del personaje permitió la lectura segunda que la UP realizó. En segundo lugar, los entendimientos todavía puntuales entre la DC y la Derecha en la discusión de la ley de presupuesto y del proyecto de reajustes. En tercer lugar, el llamado affaire del Cobre, suscitado a propósito de una denuncia del Gobierno respecto a una maniobra internacional desuinada a bajar artificialmente el precio del cobre

Parece evidente que el tema de la sedición no corresponde a la naturaleza de la coyuntura. Todo lo contrario, el conjunto de las fuerzas se movía en una perspectiva electoral. Ese hecho proporciona la clave interpretativa de la coyuntura.

Desde el punto de vista de la estructuración del campo de fuerzas, esta coyuntura se caracteriza por un enfrentamiento agudo entre la DC y la UP y por la relativa apatía política de la Derecha. Este último rasgo representa un fenómeno de continuidad, después de la derrota de la línea del Partido Nacional durante la fase de negociaciones entre septiembre y noviembre de 1970 y, luego, al conocerse las filiaciones de los autores de la muerte del General Schneider. Además durante los primeros meses de esta coyuntura, la Derecha política se ve anulada por la táctica gremial de las organizaciones patronales. De hecho,

esta táctica negaba la representación de los sectores capitalistas tanto a la DC como el Partido Nacional.

Por otra parte ¿por qué se agudiza el enfrentamiento entre dos fuerzas que, de algún modo, estaban unidas por las similitudes del programa y por las negociaciones del período precedente? Nos parece que este hecho, y por lo tanto la dinámica de la coyuntura, está determinado por la lucha electoral que se avecinaba. Se produce una contradicción entre el diseño electoral de la UP y el de la DC, en los cuales se manifiestan -sin duda- concepciones de fondo que trascienden el evento inmediato.

El Gobierno de la UP enfrentó muchas veces la disyuntiva entre buscar una ampliación de su base de apoyo por la vía de los compromisos políticos o buscarla en el marco de una política popular, que renucleara en torno a la UP a los sectores de trabajadores atraídos por la DC. Sin embargo, esa disyuntiva no puede plantearse así durante esta coyuntura. Ella no aparece entonces como una opción que tendría consecuencias decisivas para el futuro sino como un dato determinado. La dinámica electoral anula la posibilidad de plantearse el problema.

La UP enfrenta el desafío de ampliar su precaria base inicial de sustentación. Para ello cree no tener otra opción que una agresiva política que la muestre dispuesta a cumplir con el programa ofrecido. Tratar de conseguir un compromiso con la DC la obligaría a redefinir su programa, frustrando las expectativas de cambio de su propia base popular y perdiendo la oportunidad de atraer a otros sectores.

A su vez, la DC, en la cual coexisten aún diferentes y contradictorios análisis sobre el fenómeno de la UP, se lanza a conquistar el liderazgo opositor, tanto porque ve allí el ámbito de su crecimiento potencial como porque es condición de cualquier política. Necesita su poder electoral tanto si desca

mantener en el futuro esa línea de oposición como si desea articular un bloque con la Izquierda. En el mes de octubre de 1970, uno de sus principales representantes, Jaime Castillo, había dicho que el dilema político del país era el de saber si la mayoría del 36% puede gobernar dentro de la estricta plataforma con la cual se presentó a las elecciones, o si es posible orientarse a la construcción de un Gobierno, que representa a todos aquellos que apoyaron los programas de Allende y Tomic. Lo que unificaba el análisis de Castillo con los análisis opuestos internamente, era la común necesidad de superar el test electoral. Uno y otro requerían la misma condición, que la DC mantuviera intacto o desarrollara aún más su poderío de masas.

De ese modo los intereses políticos de la DC y de la UP se presentan, desde esta coyuntura inicial, como contradictorios. Para la UP la posibilidad de crecer requiere una estrategia que le permita ampliar su autonomía, aprovechando al máximo las atribuciones del Ejecutivo, para depender lo menos posible de la negociación parlamentaria.

El objetivo de la DC, en cambio, es neutralizar y amarrar lo más posible al Gobierno con el objeto de impedirle ampliar su influencia de masas. Este trata de evadir esas presiones con una estrategia legal extra parlamentaria en la que se recurre a disposiciones atípicas, no compatibles en general con la matriz burguesa del derecho civil, pero que efectivamente existían como disposiciones formalmente legales; este tipo de acción, aunque justificable desde el punto de vista de la legalidad y provocado por la misma rigidez del sistema de decisiones, es rechazado por las instancias judiciales o de interpretación de la ley. Es evidente que las querellas interpretativas a este respecto se dan durante el período en el marco de una lucha política desencadenada, donde los criterios jurídicos no son el elemento principal de la definición.

Sea como sea, este tipo de estrategia legal extraparlamentaria que la UP aplica desde el principio de su Gobierno también está

determinada en esta coyuntura por la dinámica electoral. De hecho, la agitación agraria no fue un tipo de movilización planificada por la UP. Pero el desencadenamiento de ella la pone frente a un problema con graves repercusiones electorales. Necesita reinscribir esta movilización dentro del marco legal, pero sin convertirse en adversario de los campesinos movilizados. Para ello no le queda otro camino que intensificar la Reforma Agraria.

Desde el principio la UP se ve amenazada por una neutralización de su acción gubernativa, para insertarla globalmente en el marco de una legalidad que impone la negociación y el ritmo gradual, y que impide así, también por razones de índole económica, el cumplimiento cabal del programa. Sin embargo, las condiciones de la coyuntura le obligan a rechazar cualquier posibilidad de compromiso, porque de ese modo pierde recursos para ampliar su base social, aprovechando expectativas de cambio. Por otro lado, también la DC necesita obtener un perfil propio frente al Gobierno en vista a las elecciones de abril.

La temprana aparición de la estrategia legal del Gobierno, que altera el principio del contrabalance de poderes en favor del Ejecutivo, constituye desde el principio la temática de la ilegalidad en el discurso de la Oposición, la que se convertirá más adelante en un elemento reiterativo. Pero todavía en este momento, esta imputación es cautelosa o parcial. En el lenguaje de El Mercurio, se trata apenas de la insinuación de una tendencia que era necesario precaver. En el lenguaje de la DC, donde esta temática está más constituida, la ilegalidad es una tendencia ligada a los grupos más extremos, que se neutralizaría o eliminaría mediante la restauración de la autoridad presidencial por encima de los partidos.

De hecho el tratamiento del problema de legalidad permite la expansión de tendencias a la desinstitucionalización ya presentes en el período de Gobierno anterior. En realidad,

siempre había habido una cierta flexibilidad respecto al cumplimiento de normas políticas. Por ejemplo, en un tiempo la práctica del cohecho o de la presión electoral sobre los campesinos era amparada por las autoridades locales; así como las autoridades debían consentir la acción sindical y las huelgas de los empleados fiscales. Sin embargo, en la última etapa del Gobierno de Frei empieza a adquirir importancia el fenómeno de las tomas de fundos o de sitios urbanos. Las acciones rurales son consentidas por las autoridades estatales y fomentadas por activistas de la DC. A su vez, las tomas de sitios urbanos pasan a ser consideradas como un recurso permitido que tiene su propia legalidad, por ejemplo, el lanzamiento de banderas como expresión de una toma consumada.

Desde el principio del Gobierno de Allende aparecieron renovadas tendencias a la desinstitucionalización de la lucha política. Ellas toman las siguientes formas principales: acción directa de las masas por resolver sus problemas, aparición de los temas del terrorismo y de la violencia de extrema derecha, disputa en torno a la legalidad de las medidas del Gobierno. En la fase entre noviembre 1970 y abril 1971, el tema de la violencia se plantea también a propósito de la agitación agraria y de la presunta constitución de grupos izquierdistas armados en sectores cordilleros limitrofos. Pero desde el punto de vista de la desinstitucionalización, la tendencia de mayores consecuencias futuras, por la oposición que generaría, es la estrategia legal aplicada por la UP para sus reformas económicas, vista como único camino para impulsarlas aceleradamente.

Ya en esta coyuntura ese problema hace su primera aparición, revelando los fermentos de agitación, movilización y conflicto que contiene. Los grupos y fuerzas sociales entonces marginados del control del Ejecutivo veían en el sistema de poderes contrabalanceados un buen planificado sistema de trincheras donde los atacantes caían varias veces hasta que se convencían de la necesidad de los compromisos, las negocia-

ciones y la paciencia. Por eso la decisión de estatizar la banca mediante la compra de acciones o el recurso de usar un viejo y olvidado decreto ley para requisar y expropiar es visto como una grave amenaza y sobre todo como una estratagema inesperada, como la ofensiva por las Ardenes entre los huecos de la línea Maginot.

El estudio de esta primera coyuntura de Gobierno UP demuestra que la lucha política del periodo no puede graficarse sólo como una espiral. El movimiento no es exclusivamente de unalenta y progresiva agudización y exacerbación sino también un complejo proceso donde se suceden coyunturas calientes y frías, momentos de lucha aguda y fases de interludio.

En esta coyuntura lo que más sorprende es la intensidad del debate verbal, la violencia de las imputaciones y ataques que se cruzan entre el Gobierno y la DC. Pero el crescendo se rompe después de las elecciones de abril.

2. DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES AL ASESINATO DE EDMUNDO PÉREZ. (Abril - Junio 1971).

La coyuntura siguiente abarcó el periodo comprendido entre el 5 de abril de 1971 y el asesinato de Edmundo Pérez, el 9 de junio del mismo año.

Esta coyuntura está centrada en torno a cinco ejes principales: las repercusiones políticas de los comicios de abril, el debate interno en la DC, el discurso presidencial del 21 de mayo, las requisiciones del área textil y el asesinato de Pérez Zujovic.

Los resultados de las elecciones municipales de abril sig-

al 50.86% si se agregan los votos obtenidos por la Unión Socialista Popular (organización escindida del Partido Socialista (PS) que no estaba integrada a la UP).

Esta primera cifra representa un crecimiento de 5% en el electorado nacional respecto a las elecciones de regidores del '67, pero representa un crecimiento del 13.58% respecto a las elecciones presidenciales y de más de un 37% respecto de su propia base electoral previa. Entre los partidos de la UP la repartición de votos fué la siguiente el PS obtuvo 22.89% el Partido Comunista (PC) 17.36%; el Partido Radical (PR) el 8.18% y el Partido Social Demócrata el 1.38%.

A su vez la DC obtuvo la primera mayoría partidaria nacional con un 26.21% mientras el Partido Nacional conquistaba el 18.53% (dos organizaciones menores sumaron el 4.40%).

El análisis de las cifras hace resaltar los siguientes hechos, a) el crecimiento de la UP respecto a la base de apoyo obtenida en las elecciones presidenciales; b) la estabilidad política demostrada por la DC pero también por el PN, el cual sólo disminuyó ligeramente, pese al marco político desfavorable, su votación de 1969; c) el profundo debilitamiento político experimentado por el PR. La suma de la votación del PR y de la fracción de derecha separada (Democracia Radical) alcanzó el 12.09%, inferior al 13.03% de 1969, donde había llegado a su punto más bajo el descenso sostenido de la votación radical desde 1965; d) la capitalización por parte del PS del fenómeno de la UP y el relativo estancamiento del PC. Los primeros habían obtenido el 69 el 12.23% de los votos, mientras los comunistas habían llegado al 15.51%. Así ambas fuerzas suben su participación en el electorado en un 10.66% y un 1.45%, respectivamente.

Las temáticas predominantes en el análisis electoral son, por parte de la UP, la asignación a los resultados de un carácter plebiscitario o, por lo menos, la imputación de que ellos

otorgaban una ratificación popular del camino seguido. Por parte de la Oposición, la afirmación de que se verificaba un empate político. La DC se ve obligada a aceptar el análisis de bloques (Oposición-Gobierno), porque de otro modo afirmaría la imagen de triunfo que la UP quería crear.

Desde el punto de vista de los efectos políticos, los resultados electorales producen dos procesos de reajuste y de rearticulación. Uno de ellos tiene lugar dentro del PR, el otro, dentro de la DC.

Dentro del PR, el proceso todavía queda a medio camino en el transcurso de esta coyuntura. Es evidente que el retroceso electoral es el catalizador de una crisis de identidad. Esa situación permite que rebrote interna y externamente la temática del sometimiento a las organizaciones marxistas y de la ausencia de un rol autónomo. Sin embargo, la crisis desencadenada tiene un carácter apenas incidental, cuyos momentos claves son la renuncia simbólica a sus cargos de todos los personeros de confianza del Presidente, y más tarde el comportamiento disidente de algunos senadores en la votación sobre el desafuero de un Intendente. La crisis aparentemente se estanca, sólo para continuar desarrollándose de un modo subterráneo y opaco.

En la DC los resultados electorales de abril generan un intenso proceso de discusión estratégica. El primer síntoma de esta dinámica se manifiesta a propósito de la Junta de la JDC. En ella, los jóvenes se definen claramente por una línea de diálogo, acercamiento y colaboración, pese a que critican el sectarismo de la UP. Este análisis coincide, en grueso, con los primeros que hace la Dirección Nacional frente a las elecciones. Ahí las fuerzas de la DC se agrupan en el bloque de los partidarios de los cambios, mostrando un triunfo de las tendencias progresistas en contra de los partidarios del inmovilismo y de la defensa de privilegios económicos.

Más adelante, con ocasión del discurso presidencial auto-

crítico del 1º de Mayo y con ocasión del Mensaje de Allende al Congreso Pleno, el 21 de Mayo, se revela en las interpretaciones que la DC hace de esos acontecimientos un cambio de lenguaje y de los énfasis analíticos. Ambos discursos estaban destinados a generar condiciones para una ampliación del consenso. El primero de ellos contiene un análisis auto-crítico de la gestión del Gobierno que rescata muchas de las temáticas de la DC, mientras que el Mensaje al Congreso Pleno intenta elaborar la teoría de la llamada vía chilena poniendo énfasis en el carácter democrático y pluralista del proceso de transición al socialismo en Chile. Ese análisis intenta rescatar la particularidad del caso chileno y mostrar cómo el paso al socialismo se inscribe dentro de un doble proceso de continuidad y ruptura. Es uno de los documentos más importantes del periodo y la débil acogida a él por parte de la Izquierda revela problemas que se harán evidentes más adelante,

Ambos discursos definen en gran parte el clima político de la coyuntura. El discurso del 1º de Mayo tuvo además influencia en el desarrollo de la discusión interna de la DC. De hecho, el voto aprobado en su Consejo Ampliado una semana después, consolida cambios semánticos. Hay en él una reafirmación de las temáticas revolucionarias de la DC. Incluso se habla en él de socialismo comunitario en vez de comunitarismo. Esto es muy significativo pues ese cambio en un matiz del lenguaje encerraba una larga y ardorosa polémica interna respecto a la caracterización de la sociedad futura. El voto habla de la legitimidad del Gobierno y reconoce la existencia de profundas coincidencias.

Es evidente que ese proceso de rearticulación que se produce después de las elecciones no logra madurar en ese momento. Las resoluciones del Consejo Ampliado de la DC son expresivas de esa inmadurez, aunque ese carácter de interludio, de tantos e incertidumbre modifica el clima de la coyuntura respecto a la anterior. La declaración no define una línea de colaboración y compromiso sino más bien inaugura lo que la prensa comunista

compromiso sino más bien inaugura lo que la prensa comunista llamó acertadamente una tercera fase en las relaciones entre la DC y el Gobierno, que no era ni la colaboración del momento de la negociación sobre el Estatuto de Garantías ni la oposición violenta y encarnizada de la coyuntura anterior.

Sin embargo, El Mercurio define también adecuadamente el carácter de la declaración cuando indica que ella no impedia los acuerdos ni con el Gobierno ni con la Derecha. En realidad para la DC no había acuerdo posible con la UP sino sobre la base que ésta reinscribiera toda su acción en el plano que la DC consideraba legal, renunciando incluso a las movilizaciones de masas como instrumento de presión al Parlamento o el Poder Judicial y por cierto renunciando a la estrategia legal que la UP estaba usando para implementar las reformas económicas. Para la DC se trata de llevar a la UP al juego político tradicional, haciendo que la institucionalidad recupere su papel de freno y regulador de las aspiraciones reformistas.

Sin embargo, las tendencias a la desinstitucionalización de la lucha política detectadas en la coyuntura anterior permanecen vigentes. En el campo disminuyó la frecuencia de las tomas pero también aumentó la violencia de las situaciones. De hecho la muerte en un enfrentamiento de un pequeño agricultor afiliado a la Derecha y más tarde el fallecimiento accidental de un gran propietario agrícola en el momento de la toma de posesión por la CORA producen intensas movilizaciones patronales. Asimismo aparecieron brotes de guerrillas rurales en un sector cercano a Santiago, las cuales fueron perseguidas por el Gobierno, produciéndose a propósito de estas situaciones una fuerte polémica entre el MIR y el Gobierno. A mediados de mayo entra en escena un movimiento de extrema-izquierda llamado VOP que ejecuta una serie de asaltos sin ningún motivo político aparente.

Además de estas tendencias a la acción directa, destinadas algunas de ellas a resolver por encima del Estado los problemas

confusa clasificación que proliferan en el periodo previo al asesinato de Edmundo Pérez, actúan las tendencias desinstitucionalizadoras que se originaban a causa de la estrategia de Gobierno. Las primeras tendencias escapan al control político de la UP, mientras que las segundas todavía son manejadas por ella, pues crean situaciones que permitían aplicar las disposiciones legales de excepción. Así se procede durante esta coyuntura a la expropiación del sector textil. El detonante de ese proceso es una huelga desencadenada en una de las empresas. Como ella es requisada por razones de utilidad pública, la Federación Textil hace un llamado a la ocupación de las diferentes plantas con el objeto de generalizar la situación a toda el área. Esa forma de operación era interesante en un doble sentido. En primer lugar, ella conecta al movimiento obrero a la política de expropiaciones, otorgándole un rol decisivo y, sobretodo, una sensación de poder. Sin embargo la preservación del carácter planificado del proceso requería un fuerte control organizacional de la movilización. Todavía en estas primeras etapas las movilizaciones son decididas de acuerdo a criterios generales y respondiendo a una política planificada desde arriba. Más adelante este mecanismo de operación empieza a presentar sus lados negativos, permitiendo que se generen dentro de las empresas divisiones en el campo obrero o entre obreros y empleados y desencadenando una ola de ocupaciones espontáneas, que respondían a necesidades populares pero que creaban situaciones incontrolables. Pero además del aspecto participativo, esta operatoria era interesante en otro sentido: revelaba una cierta flexibilidad del sistema legal. Sin embargo este segundo aspecto solo fue real mientras el frente opositor permanecía desarticulado o confuso respecto a la línea a seguir, lo que todavía ocurre en esta coyuntura.

Tanto la continuación de la política de requisiciones usando los procedimientos legales extraparlamentarios, como la continuación de la agitación en el campo o la aparición de brotes terroristas son sin embargo, tematizados de un modo diferente. De hecho, la DC abandona la temática de la ilegalidad. Empie-

za a decir que se estaba dentro de la legalidad pero bordeándola y que el Presidente debía evitar los excesos. Así, estaba en marcha, empujada por algunos sectores de la DC, una estrategia que abría caminos a eventuales compromisos, para lo cual ésta necesitaba distinguir, con el objeto de separar los sectores más moderados de los más extremistas.

De hecho, la ofensiva ideológica se centra en el tema de la libertad de información, lo que demuestra el carácter de la coyuntura, a propósito de un discurso de Allende a la Asamblea de Periodistas que podía ser interpretado como desvalorización de la libertad de información, o de las conclusiones de la misma Asamblea o de los enfrentamientos verbales en dos espacios políticos televisivos de gran audiencia y los presuntos intentos para modificarlos o suspenderlos. Esta temática es eminentemente preventiva, de creación de imágenes y condiciones ideológicas a largo plazo. En este terreno, era visible para todo el mundo que no existían restricciones actuales ni siquiera amenazas fuertes. La constitución en una problemática significativa de los pequeños incidentes que ocurren en la coyuntura es bastante revelador del sentido de tanteo que ésta tiene.

Para la Derecha las elecciones hicieron evidente la necesidad de romper el esquema tripartito, empujando hacia la polarización. En esta coyuntura de reestudio y redefinición de las situaciones los intentos derechistas tampoco tiene éxito. El Partido Nacional lanza la consigna de un Frente de Ideas, lo que es expresivo del bajo nivel de articulación entre las fuerzas políticas de la Oposición.

Durante toda esta coyuntura las relaciones entre la DC y el Gobierno oscilan entre el enfrentamiento y la aproximación sin que se defina con claridad una pauta estable. Hacia el final de la fase se quiebra el esquema tripartito con ocasión de las elecciones de Rector de la Universidad de Chile. En ellas triunfó la Oposición unificada en la elección de autoridades unipersonales y la Izquierda en los órganos colegiados. Pero

como contrapunto, algunos dirigentes políticos de la DC reconocen que se realizan conversaciones con la UP para empujar en común los proyectos coincidentes y la JDC propone, con el mismo objeto, la creación de una Comisión Interparlamentaria.

Estas fluctuaciones de la DC son el resultado de su carácter organizacional, de la presencia de capas populares junto con sectores burgueses y de la combinación de discursos revolucionarios con discursos modernizantes. El aspecto popular, que es indisoluble de la DC como organización, opera como mecanismo sensibilizador respecto de lo que la UP representa como fenómeno político. En estas primeras coyunturas, la UP actúa en el marco de una Oposición desintegrada. Tiene, por lo tanto, un mayor espacio para la implementación de sus medidas redistributivas, de igualitarismo social o contenido anticapitalista, como la nacionalización de los bancos y de algunos monopolios, que además eran expresivos de esa imagen de rapacidad y de explotación que constituía un elemento del sentido común popular

El carácter de la UP, que en estas primeras coyunturas no está todavía contaminado por las imágenes que se fueron generando por la agudización de la lucha política y por el desarrollo de una crisis de funcionamiento de la sociedad (desabastecimiento, huelgas), representa un fuerte atractivo para aquellos sectores de la DC más sensibles a lo popular, que ven en esta nueva experiencia la realización sin conciliaciones de sus propias esperanzas revolucionarias.

Por otra parte, la DC en su conjunto se ve enfrentada a la modificación de sus hábitos aislacionistas tradicionales. Esta necesidad política, que se va haciendo más patente en la medida que se agudizan los conflictos, es en esta coyuntura una conclusión lógica del análisis post-eleitoral. La esperanza por parte de la DC de encarnar una Oposición democrática, autónoma frente a la Derecha, se ve después de abril obstaculizada por la vigencia política de ésta última, que una vez más de-

muestra una gran capacidad de recuperación política. Las esperanzas de la DC respecto a un desastre electoral de las fuerzas más conservadoras, que le permitiera nuclear sus bases sociales en una estrategia moderada, se enfrentan—ya en esta coyuntura de interludio— a un impasse.

La Derecha no sólo sobrevive al test electoral sino también trata de tomar la vanguardia de la lucha contra la UP. En esta misma coyuntura, mientras la DC tantea las posibilidades de compromisos, ella constituye en temáticas políticas significativas algunos problemas, impulsando, por ejemplo, la acusación constitucional contra un Intendente, a propósito de la toma de posesión de un fundo por parte de la CORA arrastrando en ello a la DC tras sus posiciones.

Esa táctica de radicalización está favorecida por la actitud que empiezan a asumir algunas organizaciones patronales, sobre todo las agrarias. Estas organizaciones abandonan a fines de la coyuntura pasada la línea de búsqueda de un compromiso defensivo para empezar a aglutinar cierto tipo de movimientos sociales. Estos cobran alguna fuerza a propósito de la muerte accidental de un latifundista, en ocasión de la toma de posesión mencionada. A este incidente se le confiere un carácter simbólico, permitiendo la realización de una serie de actos expresivos (exequias solemnes, paro patronal, declaraciones), que demuestran un fermento de movilización entre los patrones agrícolas.

En este contexto se produce el asesinato de Edmundo Pérez Z., ex ministro del Gobierno de Frei, -a quien la oposición de entonces responsabilizó de acciones represivas contra pobladores durante el Gobierno anterior-, en manos de un grupúsculo de extrema izquierda, la VOP, que había comenzado a actuar después del acceso de Allende al Gobierno. Ese tipo de grupo era muy permeable a la infiltración, puesto que -a diferencia de otras organizaciones de extrema izquierda- carecía de consistencia ideológico-política. El asesinato del dirigente

3. DEL ASESINATO DE PEREZ ZUJOVIC A SEPTIEMBRE DE 1971 (Junio 1971 a Septiembre 1971)

consistencia ideológico-política. El asesinato del dirigente demócrata-cristiano, vinculado a Frei por viejas y estrechas solidaridades, no estaba asociado a ningún plan político contra la DC. Fue un acto de terrorismo puro, realizado por un grupo que reclutaba elementos del lumpen político (11).

No es posible saber si ese acto inesperado e incontrolable cambió la dirección de la historia en el periodo. Para afirmar ese carácter crucial se necesitaría evaluar las reales posibilidades de acuerdo entre la DC y la UP y detectar las modificaciones de la situación y del clima político que son imputables a este asesinato. Nos parece que esas posibilidades siempre fueron casi nulas para la constitución de un bloque de Gobierno con el Centro, por los efectos que una decisión de ese tipo hubiese tenido, tanto para la unidad de la DC como para la unidad de la Izquierda. Sin embargo, en esta coyuntura de interludio había grandes posibilidades de constituir acuerdos parlamentarios para aprobar proyectos decisivos de reforma económica.

Más tarde esos acuerdos fueron intentados varias veces sin éxito.

El asesinato de Edmundo Pérez reflota la temática de la incapacidad del Gobierno para encauzar el orden público y permite pintar la situación caótica de una sociedad hundida en el desquiciamiento moral.

Por primera vez la UP y el Gobierno quedan a la defensiva desde el punto de vista político, intentando demostrar alguna conexión entre los autores materiales del crimen y los esfuerzos de desestabilizar al Gobierno.

(11) *El Gobierno sostuvo después del asesinato de Pérez. que existían evidencias de intervención extranjera en él. Esas denuncias fueron públicamente desestimadas por la Oposición, en particular por la DC. Sin embargo, las investigaciones del Senado norteamericano respecto a la intervención de la CIA. en Chile las convierten en verosímiles.*

El asesinato de Edmundo Pérez significa el término de esa coyuntura de interludio, de tanteos y de medición de fuerzas, para dar comienzo a una nueva coyuntura que continúa esas modalidades bajo otra forma.

Esta coyuntura abarca desde el asesinato del ex-ministro, con su prolongación, en el periodo inmediato, en la captura de los hechos y en las primeras reacciones políticas, hasta los primeros días de septiembre de 1971. Esta fase también tiene un sentido de interludio, pero de una forma diferente del primero.

Tres son los ejes principales de esta coyuntura: la elección complementaria de un diputado en la provincia de Valparaíso, la división de la DC y del MAPU que dieron lugar a la constitución de la Izquierda Cristiana y la división del Partido Radical. En la fase anterior habían aparecido algunos signos de polarización, confundidos entre los numerosos elementos de incertidumbre que caracterizaban la coyuntura. No expresaban una tendencia, sino uno de los desarrollos posibles, cuyo predominio no parecía asentado. El principal de esos signos era la candidatura unificada para las elecciones en la Universidad de Chile.

Esta nueva coyuntura de interludio está marcada por el asesinato de Pérez Zujovic y por la multiplicación de los signos de polarización. La fase anterior había sido fría desde el punto de vista de la intensidad de los conflictos políticos. Esta nueva coyuntura es caliente y tensa.

Las acusaciones y contra-acusaciones a propósito del asesinato, producen un quiebre radical entre la DC y el Gobierno. Mientras éste acusa al fascismo y a la sedición, la DC encabeza

una ofensiva ideológica y política contra las bandas armadas, toleradas por el Gobierno. El diario demócrata cristiano llega a afirmar que desde el ascenso de Allende un ambiente de criminalidad se ha desarrollado en el país.

Este clima favorece los contactos entre la DC y el PN a propósito de la elección complementaria por Valparaíso. Muy rápidamente ambas organizaciones se ponen de acuerdo en un candidato único, un ex-radical de derecha afiliado a la DC.

Esta organización aprovecha el desconcierto del Gobierno y la necesidad de la Derecha de conseguir su apoyo para transformarse en la fuerza predominante. La Izquierda a su vez define el bloque de oposición como un hecho consumado, sin darse cuenta que la complejidad del cuadro político llevará a la DC pronto a nuevas políticas pendulares. Efectivamente, en pleno período pre electoral se producen violentos roces entre dirigentes de la DC y personalidades de la Derecha.

La estrecha derrota electoral de la Izquierda en Valparaíso tiene lugar en un momento en que empiezan a perfilarse algunas discrepancias en el seno del PS. Ellas estallan a propósito de un documento de la Comisión Nacional Agraria en que se cuestiona la posibilidad de un tránsito institucional al socialismo. La Comisión política rechaza esos planteamientos y como respuesta replantea la tesis de un enfrentamiento decisivo en el marco institucional (plebiscito), que permitiera abrir espacio a las indispensables reformas políticas.

La derrota de Valparaíso constituye el primer momento de esta coyuntura, la cual se redéfine a partir de ese momento. Inmediatamente después del triunfo, la DC insiste en dos ideas: la ausencia de un pacto con la Derecha, la cual habría apoyado a su candidato, porque carecía de alternativa, y la necesidad de producir dentro de la UP una decantación entre los sectores de democráticos y los violentistas. Incluso se afirma que no se le

pide al Presidente una alteración de su programa, sino la ruptura con el aventurismo extremista.

Esos énfasis están determinados por el desarrollo de un grave conflicto interno en el interior de la DC. Ese conflicto estalla durante una larga reunión del Consejo Nacional de la organización, en la cual la línea de Izquierdo Cristiana plantea el rechazo a cualquier entendimiento con la Derecha. La mayoría estuvo por ratificar los planteamientos del anterior Consejo Nacional Ampliado en donde se insistió en la votación revolucionada y popular de la DC, y se abrió un espacio de colaboración puntual tanto con la Izquierda como con la Derecha, a través del cual se pretendía constituir una alternativa propia y autónoma de oposición constructiva.

Los sectores disidentes se retiran del Partido. Su renuncia coincide con la separación del MAPU de sectores que reivindicaban un espacio político para opciones doctrinarias específicamente cristianas y que habían sido desplazados de la dirección real de este partido. Ambos procesos de separación tenían raíces profundas que superaban el marco coyuntural.

El grupo disidente de la DC correspondía en gran medida a lo que durante el Gobierno de Frei se llamó la tendencia tercerista. Una de las especificidades de ese grupo era su exigencia de concretar efectivamente la política práctica del Partido con la línea programática de largo plazo: vocación revolucionaria de contenido anticapitalista, afirmación del socialismo comunitario como alternativa de sociedad. El otro rasgo específico era la afirmación de la raíz y de la tradición cristiana de su búsqueda ideológica. En el pasado ése había sido un gran hito demarcatorio en la DC entre el grupo tercerista y los rebeldes, que fundaron el MAPU. Estos últimos buscaban una incorporación plena al movimiento popular, lo que los lleva a asimilarse a la tradición marxista que en él imperaba. Ellos no buscaban ser una alternativa de Izquierda respecto a la

DC, sino una alternativa respecto a los partidos populares. Siguiendo esa línea buscaron inicialmente su identidad en una crítica a la Izquierda como "establishment" político para intentar transformarse más tarde en un partido obrero de línea marxista que representaba a "nuevas capas". Situado el MAPU por su elite dirigente en esta perspectiva de construcción partidaria era evidente que no había en su interior espacio ideológico y político para los dirigentes parlamentarios y sus seguidores que habían salido de la DC en 1969 y fundado, junto a sectores juveniles, el MAPU. Tampoco había en esta organización espacio para absorber el nuevo contingente escindido ahora de la DC y que funda la Izquierda Cristiana. Así pues, esta confluencia entre la crisis interna de la DC que se desencadena después del triunfo electoral de Valparaíso y la contradicción en el MAPU entre los sectores señalados permite la constitución de una nueva organización política, la Izquierda Cristiana.

Casi simultáneamente se inicia la XXV Convención del Partido Radical. Allí también estalla un conflicto entre los sectores que buscan -más de acuerdo a la tradición- definir al partido como una organización social democrata y los sectores cuyo interés central es una incorporación plena del PR a la UP, los cuales están dispuestos a pagar el precio ideológico de una marxistización. En realidad, detrás de ese conflicto ideológico, hay un conflicto político que -dada la naturaleza de la organización- constituye su contradicción central. Escondidas bajo la forma de un enfrentamiento doctrinario, luchan dos concepciones diferentes de la UP y del papel del PR dentro de ella. La tendencia que en el momento de la escisión se organiza como PIR define el papel del partido como un factor moderador, como bisagra entre el Gobierno y la Oposición; el grupo que permanece en el PR cree que esa táctica los marginaliza dentro de la UP y debilita así su influencia política.

El incidente que hace estallar el conflicto fue el carácter marxista que se le atribuyó al voto político aprobado por la

Convención. El propio Allende lamentó este giro del Partido Radical e hizo valer toda su influencia política para obtener la reunificación, aceptando las reivindicaciones de los disidentes respecto al carácter del radicalismo.

Este segundo momento de la coyuntura modifica el clima político del principio, caldeado por el asesinato político y por la campaña electoral de Valparaíso. El conjunto de reordenamientos que estaban en curso producen un estancamiento de la agitación política y de la violencia verbal entre la UP y la DC.

La ruptura interna de esta última, le permite visualizar los efectos organizacionales de una alianza estable con la Derecha, lo que la lleva a una reafirmación de los contenidos revolucionarios y populares de su posición.

De hecho, el proceso de reordenamiento amplía la base política de la UP y debilita a la DC, no tanto por los efectos cuantitativos de la escisión como porque ella demostró su vulnerabilidad organizacional.

En la UP este proceso tiene un doble aspecto. La creación de la Izquierda Cristiana permite fundar un cauce orgánico para sectores cristianos que ven en el socialismo y en el programa de la UP una alternativa política de largo plazo. Ese papel no había sido asumido por el MAPU, puesto que esta organización se había alineado en posiciones marxistas. La aparición de la Izquierda Cristiana no sólo es importante en relación a la organización de la cual proviene, sino sobre todo en función de la diversificación de la UP que produjo. El otro aspecto dice relación con la escisión radical. La reacción del PIR significa la fundación de una fuerza socialdemócrata que reivindica para sí un rol crítico dentro de la UP y cuya lealtad al bloque gobernante dependía de que éste modificara algunas de sus formas de acción, en especial, su estrategia de reformas económicas.

Por lo tanto, la ampliación de la base política de la UP es una expansión condicionada. Su debilidad se apreciará en la próxima coyuntura cuando el PIR se realice junto a la DC.

Este proceso de reajuste político define el sentido de la coyuntura otorgándole el carácter de segundo interludio. El primero fue el resultado del éxito electoral de la UP, el cual junto con las tendencias populares en el interior de la DC empujaron a esta colectividad a un viraje político hacia la Izquierda. Es la época de la ofensiva interna de la juventud DC (JDC) y de la definición de una línea de oposición constructiva y democrática. Sin embargo, el asesinato de E. Pérez revirtió esa tendencia que empezaba a insinuarse, creándose un bloque electoral de oposición unificado. Pero inmediatamente después del triunfo de Valparaíso, la escisión de la DC cambia el sentido de la coyuntura. Esta adquiere el tiempo característico de los momentos de medición de fuerzas y de reevaluación de las circunstancias políticas.

Además de estos ejes de sentido que ordenan lógicamente los diferentes acontecimientos, esta coyuntura presenta algunos otros procesos significativos.

En primer término, se intensifica la lucha por la constitución del área de la propiedad social. Esta lucha toma entonces dos formas: una institucional y la otra social. La primera se descadena a causa del rechazo por la Contraloría del decreto de expropiación de una de las grandes empresas textiles (Yarur). Enfrentado a ese problema, de graves repercusiones porque las organizaciones de trabajadores anunciaron su rechazo a la devolución de la empresa, el Gobierno sale del paso por la vía institucional puesto que la Contraloría acepta los nuevos antecedentes enviados.

Sin embargo, en el mes de agosto este tipo de conflictos vuelve a brotar a propósito de la requisición de las empresas pesqueras. Allí por primera vez, el Gobierno enfrenta una

fuerza interna movilizada en contra de las expropiaciones: los empleados de las empresas.

Esta movilización de los empleados es, desde el punto de vista del análisis, un episodio muy significativo. Inaugura, aunque todavía en forma precaria y sin dimensión nacional, una estrategia, la de oponer a la movilización de los obreros la movilización de los empleados de los estratos intermedios de las industrias o servicios. Hay que recordar que en Chile la CUT afiliaba tanto a unos como a otros, por lo tanto la movilización opositora de los empleados podía escindir la unidad del movimiento sindical. De hecho, este episodio de las empresas pesqueras le plantea a la Izquierda la necesidad de construir la unidad de acción entre obreros y empleados para crear las condiciones de la expropiación.

Otra problemática que comienza a desarrollarse en esta coyuntura es el tema del desabastecimiento. Alrededor del 20 de julio aparecen por primera vez en los diarios alusiones a este problema, que será central en el desarrollo de la crisis política. La UP responde desde el principio tratando de aplicar una línea de masas. El Ministro de Economía, Vuskovic, se reúne con sectores femeninos para explicar los problemas de la política económica y llama a la participación popular en la lucha contra la carestía y la escasez de algunos productos. El tema desaparece de la prensa para volver a reaparecer con más fuerza a fines de agosto. En ese momento se plantea en la UP la consigna de las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP), organismos de base a través de las cuales se intenta canalizar la participación popular en la lucha por el abastecimiento.

Como vemos, la coyuntura tiene, pese a su doble ritmo interno -unificación y triunfo de la Oposición al principio, más tarde reajuste del campo político-, un sentido global de delante y reevaluación.

4 DE SEPTIEMBRE 1971 A LA APROBACION DEL PROYECTO DE SOBRE AREAS DE LA ECONOMIA (FEBRERO 1972)

La quinta coyuntura del periodo abarca desde septiembre de 1971 hasta febrero de 1972. Esta fase tiene tres diferentes momentos internos: el primero se desarrolla en el mes de septiembre, el segundo desde octubre hasta diciembre, durante el cual la intensidad de los conflictos alcanza su peak. El tercero desde diciembre hasta febrero de 1972, mes en que los conflictos -pese a mantenerse en un alto nivel- disminuyen en intensidad relativa.

El primer momento de esta coyuntura está caracterizado por la contra-ofensiva opositora dirigida por el Partido Nacional. Esta fuerza política, representativa de los sectores burgueses y latifundarios buscó desde el principio el desarrollo de una oposición frontal, pues requería de otro ritmo en la resolución de las contradicciones y conflictos. Ligada directamente a los intereses económicos afectados, no estaba sacudida, como la DC, por la atracción del significado popular de la UP. Sin embargo esa dualidad de la DC determinaba toda la línea política del PN. Hasta ahora en general se había subordinado pues sabía que la DC representaba la fuerza crucial del equilibrio político. Pero, como consecuencia de la escisión de los sectores izquierdistas y de los efectos de reflujo que ese proceso causa dentro de la DC, el PN decide desencadenar una ofensiva que obligue a plegarse a los factores centristas, sobre la base del fuerte apoyo gremial que podría desencadenar.

La UP responde poniendo en el tapete el tema de la sedición e iniciando una gran ofensiva ideológica en ese terreno que culmina con la entrega oficial de antecedentes a la Directiva de la DC. Aunque esta última los consideró públicamente como insuficientes, el hecho fue que empieza a buscar un camino diferente de aquel planteado por el PN: las conversaciones con

Allende, que culminan en el compromiso de éste último de enviar un proyecto de ley respecto a la formación del área de propiedad social y respecto a la estructuración jurídica general de la propiedad industrial y comercial.

El segundo momento de esta coyuntura empieza a desplegarse en el mes de octubre. Allí la DC, aduciendo tardanza por parte del Gobierno para el envío del proyecto sobre las áreas de la economía pactada en septiembre, presenta un proyecto propio de Reforma Constitucional. En ese proyecto se derogaban las disposiciones que habían permitido la formación del área social por la vía administrativa y se determinaba que en lo sucesivo las expropiaciones debían ser objeto de sanción legal en cada caso. El Gobierno envía rápidamente un proyecto alternativo en el cual se le otorga al Ejecutivo un margen amplio de iniciativa para expropiar las grandes empresas, al mismo tiempo que se garantiza la situación de los empresarios pequeños y medianos. De esta forma, a menos de un año del comienzo del Gobierno se plantea el gran conflicto institucional del período.

El envío de este proyecto coincide con el comienzo de una ofensiva de masas de la Oposición cuyos elementos catalizadores son los conflictos desencadenados en el mes de noviembre a propósito de la situación en la Universidad de Chile y de los intentos del Gobierno de comprar acciones de la Compañía Papelera, productora monopólica del papel para la confección de los diarios y revistas y una de las más grandes empresas del país. De hecho, el mes de noviembre es también una fase de conflictos parciales pero de gran intensidad política. Sin embargo, las movilizaciones y los enfrentamientos no desembocan durante ese mes en una crisis de violencia.

El conflicto de la Universidad de Chile comienza por la decisión del Consejo Normativo Superior de aprobar una determinada estructuración de la Universidad en Santiago. La mayoría de la Izquierda en ese organismo colegiado había aproba-

do una reestructuración donde el punto conflictivo era la ubicación de la Escuela de Derecho. Ya en el mes de octubre la decisión de aprobar la nueva organización había desencadenado la toma de locales por parte de la Oposición. En noviembre esta situación inicial se transforma en una crisis general del gobierno de la Universidad: empiezan a funcionar organismos colegiados paralelos, cada uno de los cuales negaba la legitimidad al otro; se producen enfrentamientos violentos en la Escuela de Derecho y en la Escuela de Ingeniería, donde la Izquierda intenta retomar los locales ocupados.

El conflicto de la Universidad de Chile es revelador desde dos puntos de vista. En primer lugar, revela el grado de expansión y penetración de los conflictos políticos, capaces de sacudir casi todas las instituciones y de movilizar a personas que hasta entonces habían estado al margen de ese tipo de preocupaciones. Desde 1967, las universidades chilenas vivían procesos de reforma que las habían sacudido y habían dividido en torno a ellos a los universitarios; sin embargo, tales contradicciones expresaban mediatizadamente, y a través de un complejo proceso de refracción, las de la sociedad. Ya desde inicios de 1971 los conflictos universitarios, en cambio, serán simple reflejo de lo que ocurre en la sociedad política. En segundo lugar, revela cambios importantes en las formas y estilos de acción de la Oposición. Toda ella y ya no sólo los sectores extremistas, deciden oponerse a la Izquierda en el terreno de la movilización de masas, acudiendo para ello a las acciones extra legales.

El mismo sentido general tiene el conflicto a propósito de la constitución de un poder comprador, por parte del Gobierno, de acciones de la Papelera. La Oposición centra el problema en la defensa de la libertad de prensa y expresión, eludiendo totalmente la temática de la acción antimonopólica que el Gobierno esgrimía. Lo importante es que la Oposición logra generar una importante movilización de dirigentes de gremios profesiona-

les, de personalidades políticas y económicas y de sectores de empleados y obreros de la misma empresa.

Todos estos conflictos se agudizan en el mes de diciembre, fusionándose además con otros nuevos. Ese mes comienza con una gran concentración de mujeres citada por un conjunto de organizaciones gremiales patronales para protestar por el desabastecimiento. Es interesante anotar el sentido de la temática movilizadora: ella apuntaba a un problema nacional y no a un interés de clase. Con eso se busca atraer a la mayor cantidad de personas posibles y al mismo tiempo atraer a la DC.

Esa concentración termina en una serie de enfrentamientos entre contramanifestantes y comandos masculinos encargados de la protección de la marcha. Se produjeron ataques a sedes políticas de la UP, a vehículos, a personalidades de la Izquierda. Durante la noche los manifestantes opositores al Gobierno continuaron formando barricadas, atacando a vehículos de la locomoción colectiva. La consigna era producir el máximo de agitación posible pues los incidentes se prolongaron artificialmente durante una semana. Tanto el tipo de organización como las secuencias posteriores a la concentración reflejan la intervención en ella de elementos externos.

Esta concentración fué, pese a la participación de todos los sectores, una iniciativa que desbordó, tanto en su origen como en su conducción, a la DC. Los incidentes revelan la presencia militarmente organizada de sectores de extrema derecha que aseguraron el control del orden interno, que enfrentaron a los contramanifestantes y que dirigieron las asonadas nocturnas.

La DC visualiza por primera vez el peligro de estar siendo desbordada por masas a quienes la acción de la UP radicalizaba. Por ello cita a sus militantes a una concentración en el Estadio Nacional y lanza acusación constitucional contra el Ministro del Interior Tohá. De ese modo, intenta reafirmar su propio

arraigo de masas, al mismo tiempo que demostrar su firme voluntad opositora y su intención de circunscribirla, en lo fundamental, dentro del campo institucional. Para la DC, que no buscaba entonces la caída del Gobierno, la suma y fusión de enfrentamientos tal como había sido intentada por la Derecha y Patria y Libertad durante los primeros días de diciembre, sólo conduce a un caos político que favorecería a los sectores extremistas de la UP. Para ella el conflicto central debía ser el enfrentamiento Político en el ámbito parlamentario e institucional.

De hecho, la acusación constitucional al Ministro Tohá consigue desplazar el foco del conflicto, al mismo tiempo que permite la recuperación política de la UP. Esta realiza una serie de movilizaciones parciales que culminan en un gran acto en el Estadio Nacional.

A mediados de diciembre los problemas electorales acaparan nuevamente el interés político. La DC y el PN vuelven a crear un frente político unificado, con un candidato común, para las elecciones complementarias de un Senador por O'Higgins y Colchagua y de un diputado por Linares. Sin embargo, a diferencia de la situación en las elecciones de rector en la Universidad de Chile o en las complementarias por un Senador en el extremo sur o de un diputado por Valparaíso, el pacto es ahora compensado (un candidato del PN y otro de la DC para cada elección), lo que demuestra un cierto cambio en las relaciones políticas entre la DC y el PN.

Enero es un mes en que se resuelven algunos importantes conflictos o que llegan al término de su discusión legal iniciativas que se venían arrastrando desde septiembre u octubre de 1971. Así el Congreso acepta la acusación constitucional contra el Ministro Tohá, pese a que la Izquierda moviliza en alto grado su presión de masas; la Cámara de Diputados aprueba la Reforma Constitucional respecto a las áreas de la economía, quedando solo pendiente su discusión por el Congreso

Pleno en sesenta días, mientras que, se encuentra una solución política negociada al conflicto de la Universidad de Chile.

La lucha política durante el mes de enero se desarrolla enmarcada por la nueva derrota electoral experimentada por la Izquierda en las elecciones complementarias mencionadas y por las divisiones internas que esa derrota expandió. De hecho la campaña electoral de Linares se ha dado por parte de la UP en torno a una temática izquierdizante y con una fuerte participación del MIR. Las fuerzas políticas de la UP de la provincia junto con el MIR y el Consejo Comunal Campesino, organismo que agrupaba las organizaciones campesinas de base, elaboraron una declaración política como plataforma de la campaña, en la cual se desbordaba el programa de la UP. En pleno período electoral el PC y el PR reclaman, alineando en contra suya a las demás fuerzas de la UP, especialmente a la IC, y también al MIR. El resultado electoral hace reducir las críticas comunistas a la conducción de la campaña.

La oposición, dirigida en ese terreno por la DC, comienza después de las elecciones una intensa campaña llamando al Gobierno a la rectificación. Este responde mediante la reorganización de un nuevo Gabinete con la presencia del PIR. Al mismo tiempo, el Presidente envía un proyecto de ley donde fija las 91 empresas que serían expropiadas.

De ese modo esta coyuntura, la más intensa de todas desde el punto de vista de los conflictos, termina con un signo álgido.

Esta coyuntura es, desde todo punto de vista, una fase que marca un quiebre respecto a las anteriores. En primer lugar, la DC se ve obligada a sumarse a la ofensiva opositora, a riesgo de ser desbordada por las iniciativas políticas de la Derecha o, como en el caso de la concentración de los primeros días de diciembre, a riesgo de ser desbordada por iniciativas de movi-

mientos gremiales o de organizaciones de agitación que empezaban a aparecer en el escenario (frente de mujeres).

Esas movilizaciones ya revelan una cierta radicalización de masas. Dos son los factores que permiten una expansión del descontento contra el Gobierno entre sectores de capas medias, principalmente profesionales, sectores de pequeña burguesía y de burguesía pequeña y mediana. Uno de ellos es la aparición de brotes relativamente importantes de desabastecimientos, el otro es la decisión de la Unidad Popular en continuar adelante su estrategia de cambio económico.

Sin embargo, la forma asumida por la manifestación de los primeros días de diciembre lleva a la DC a un nuevo movimiento de retroceso, dándose cuenta que la multiplicación de los enfrentamientos directos caotiza la situación política, creando las condiciones favorables para las soluciones extremistas de uno y otro lado.

Pero, como consecuencia del clima político de la coyuntura, ese movimiento de retroceso se realiza mediante una amplificación de la intensidad del conflicto institucional. Ese es el significado de la acusación constitucional al Ministro Tohá. Ella tiene sentido dentro de una cierta lógica: la disputa por la dirección política de la Oposición es percibida por la DC como la lucha por atraer masas en proceso de radicalización, a cuyas condiciones ideológicas ella en gran medida debe subordinarse. Esta hipótesis se basa en un hecho: que la dirección de la DC estaba en manos de su centro político y no en manos de la derecha interna. Para esa dirección centrista el objetivo no es la liquidación del Gobierno sino la institucionalización de su acción política (12).

(12) Hasta el 28 de mayo de 1973 el PDC es presidido por personas del centro, las cuales incluso habían estado conecados con el grupo que constituyó la IC. En diciembre de 1970 Narciso Irueta reemplazó como presidente a Benjamín Prado, que había estado a cargo de las negociaciones con la UP

En esta coyuntura la DC obtiene formalmente ese objetivo a través de la aprobación de la Reforma Constitucional sobre las áreas de la economía. Ese proceso queda finiquitado en primera instancia en el mes de febrero de 1972, a través de la aprobación por el Congreso Pleno del proyecto presentado por la Oposición.

Sin embargo, junto con la aprobación de este proyecto considerado crucial, la DC puede percibir las debilidades y las fallas de su táctica, puesto que el problema de los vetos del Ejecutivo al Proyecto plantearían un problema cuya salida legal era difícil, compleja y controvertida y puesto que la UP sigue su propia lógica política.

El sentido de la acción de la UP es, por una parte, racional: continuar adelante con las expropiaciones por la vía administrativa para afrontar desde posiciones de mayor fuerza una negociación posible y quizás necesaria. Pero el efecto de esas acciones es que ellas fomentan la radicalización y la polarización de masas y dan margen a la desconfianza en las reglas del juego de una eventual negociación.

A fines de esta coyuntura la DC se encuentra frente a un círculo vicioso cuyos elementos son los siguientes: a) la reforma constitucional aprobada en el Parlamento, en vez de producir una institucionalización de la lucha política y de la acción de la UP, puede provocar un enfrentamiento; b) una negociación aparece como necesaria pero -al mismo tiempo- existen fuertes dificultades ideológicas y políticas para llevarla a cabo con éxito.

A su vez la Derecha aprende sus propias lecciones de esta coyuntura. En la fase anterior, que llamamos de segundo interludio, captó la

por la aprobación del Estatuto de Garantías. En noviembre de 1971 Irueta fue reemplazado por una directiva presidida por René Fuenzalba, la cual era aún más representativa que la anterior de los grupos progresistas. El desplazamiento de la dirección a los sectores más de derecha partidaria sólo se consumó al final del período. Sin embargo esos grupos tenían desde antes una gran influencia en los órganos colegiados de dirección política.

vulnerabilidad organizacional de la DC, la cual era el resultado del carácter constitutivo y no accidental de su populismo. Este le permitía ser el tipo de centrismo que era. En esta coyuntura de ofensiva opositora se hace visible otro aspecto vulnerable: la posibilidad de una fisura entre los representantes políticos y parte de la masa representada por la DC. Ese es el sentido de agitación permanente, de la búsqueda de incidentes movilizadores: producir entre la masa hasta entonces liderada por la DC un cierto estado ideológico y emocional, una sensación de amenaza, de angustia y de tensión.

Por otra parte esta coyuntura revela la existencia de líneas divergentes en la Unidad Popular. Es indudable que esa situación no era coyuntural, puesto que existían diversidades históricas que se remontan a los orígenes y que habían adquirido una modalidad especial después de la Revolución Cubana y de la divulgación de la línea foquista, experiencias exaltantes donde parecía estar la respuesta a la historia frustrante de las alianzas fracasadas con el reformismo y de las repetidas y sucesivas derrotas electorales. Sin embargo, el éxito para muchos inesperado de la candidatura de Allende había moderado las disidencias dentro de la UP frente al carácter gradual e institucional del proceso. Pero ello sólo mientras el Gobierno mantiene la iniciativa política, lo que significa que estas disidencias empiezan a aparecer con más fuerza en esta coyuntura.

Es evidente que la línea izquierdista dentro de la UP no puede considerarse sociológicamente como un error. Ella es la manifestación de un clima ideológico que se había expandido en la Izquierda desde la década de los sesenta: la puesta en cuestión del modelo estratégico soviético respecto a la revolución en los países subdesarrollados; la fe en el socialismo y la creencia—fuertemente desarrollada por los intelectuales—del fracaso del capitalismo.

También manifestaba esa convicción crítica de que la fuerza hace la política, lo cual constituía una especie de extracto de sentido común respecto a lo que era el leninismo. Asimismo manifestaba una profunda esperanza en el cambio total y el deseo semi-espontáneo de las masas por ejercer efectivamente su poder, lo que la construcción

del APS limitaba sólo a ciertos sectores de la clase obrera.

Por ello no es raro que estas tendencias afloren en este momento de reflujo de la iniciativa política, cuando la UP, por primera vez desde que asumió el Gobierno, enfrenta la sensación de un impasse político.

En la última fase de esta coyuntura, la UP realiza la llamada Reunión del Arrayán que constituye el primer debate autocrítico del período. El énfasis estuvo puesto en la crítica a las tendencias burocráticas que -se decía- habían impedido plantear de un modo adecuado la lucha ideológica con la Oposición, de modo que el fondo del debate político era opaco para las masas, y que también habían impedido la participación y la movilización en torno a los objetivos políticos de la UP. La Oposición ve en esa reunión la constitución de dos bloques internos, uno dirigido por el PC y el otro por el PS. Sin embargo, esos problemas de oposición interna no habían aflorado con toda su fuerza. Ellos se desarrollan a partir de la siguiente coyuntura.

5. DE LA APROBACION DEL PROYECTO DC DE LAS AREAS DE LA ECONOMIA AL FRACASO DE LAS CONVERSACIONES GOBIERNO-DC. (Febrero - Junio 1972).

La coyuntura anterior representa un auge de la ofensiva opositora. Esta tuvo su punto culminante, desde el punto de vista de movilización y enfrentamiento de masas, en la marcha femenina del 1º de diciembre y en los incidentes posteriores. A partir de entonces la coyuntura se centró en la discusión legislativa del proyecto de reforma constitucional que afectaba las atribuciones del Ejecutivo para ejecutar las reformas económicas por vía administrativa.

Esta nueva coyuntura, que abarca desde la aprobación por el Congreso Pleno del proyecto enviado por la DC hasta el fracaso de las

conversaciones entre ésta y el Gobierno, tiene tres ejes principales. El primero de esos ejes es el intento de llegar a acuerdos respecto a las reformas económicas que el Gobierno estaba decidido a impulsar, el otro eje es la ofensiva de la UP por terminar la Reforma Agraria y por avanzar en la constitución del APS; el tercero es la aparición pública de una estrategia de derrocamiento, tanto por parte de la Derecha como de Patria y Libertad. A fines de esta coyuntura tienen lugar dos hechos de significativa importancia: la segunda reunión autocrítica de la Unidad Popular, en Lo Curro, donde se redefinen los lineamientos de la política económica, con importantes repercusiones internas en la UP, y las elecciones de directiva de la CUT, en que por primera vez en su historia se hace con participación directa de todos los trabajadores afiliados.

Las conversaciones entre la DC y el Gobierno son el resultado de un doble impasse político. Por una parte, Allende y la mayoría de la UP se dan cuenta que la aprobación del proyecto opositor bloqueaba definitivamente la acción gubernativa: a su vez la DC percibe que la ausencia de una clara mecánica legal o de un consenso de interpretación para resolver los problemas jurídicos implicados y la resistencia por parte de la UP a someterlos a un plebiscito, convierte su intento de conseguir rectificaciones por parte del Gobierno en una ilusión. Incluso la situación que se provocaba permitiría a algunos sectores encontrar justificaciones para preparar el enfrentamiento.

Por ello la DC intenta encontrar una fórmula de consenso que hiciera fructífera su táctica permanente de cercar al Gobierno dentro del marco legal. Ella percibe entonces que al no producirse ese acuerdo se prolongaría el conflicto jurídico, favoreciendo las tendencias al derrocamiento que, para la directiva centrista de la DC, representaba el fracaso de su política.

Estas conversaciones se desarrollan con interrupciones momentáneas, entre marzo y junio. El ritmo de esas conversaciones puede describirse así: en el mes de marzo las partes en conflicto fijan posiciones mediante un Manifiesto de la Oposición y una respuesta redactada por el Comité Político de la UP. El primero plantea que la

aprobación o rechazo de los vetos debería hacerse por simple mayoría de los parlamentarios en ejercicio, que el Tribunal Constitucional no es competente y que la única salida al conflicto de poderes es el plebiscito. A su vez la Izquierda reivindica la competencia del Tribunal Constitucional y acusa a la Oposición de cercenar las prerrogativas y atribuciones gubernamentales. Las conversaciones comienzan sobre la base de esos planteamientos iniciales entre la DC y los representantes del Gobierno. Sin embargo al poco tiempo son suspendidas por iniciativa de la DC como consecuencia de la continuación de las requisiciones. Son reanudadas más adelante para caer en un nuevo impasse, ahora porque el negociador del Gobierno no tenía atribuciones para llegar a acuerdos sin consulta previa al Presidente y al Comité Político de la UP.

Como no se produce consenso sobre la mecánica ni en definitiva sobre del contenido, el Presidente clausura el período extraordinario de sesiones del Parlamento, con el objeto de impedir la violación inmediata y de ganar tiempo.

En el mes de abril las conversaciones entre la UP y la DC provocan su primer impacto político importante. Este consiste en el retiro del PIR del Gobierno a causa del rechazo por parte de la mayoría de la UP de los acuerdos negociados entre el Ministro de Justicia, afiliado a ese partido, y la DC. Los acuerdos obtenidos son considerados por la mayoría de la UP como lesivos respecto al Programa de la UP. La situación producida refleja la complejidad del cuadro interno de la Izquierda respecto a las conversaciones y al nivel de las transacciones aceptables. El abanico comprendía desde el PIR, que rechaza la estrategia de reformas económicas adoptada, hasta el PS que no veía con buenos ojos las conversaciones entabladas.

En el mes de mayo las conversaciones reemprendidas con nuevos negociadores llegan a un nuevo punto de impasse. La DC insiste que el proyecto aprobado por el Parlamento constituye la matriz a partir de la cual se debe elaborar la nueva ley. Además ella transforma en punto intranstable el papel que debían jugar las empresas de trabajadores en la constitución del nuevo orden económico. Es evidente la

función ideológica de esa reivindicación, como afirmación de identidad política y punto de ruptura simultáneo con las concepciones estatizantes y liberales. Dentro de la UP no se pudo generar un consenso para aceptar las proposiciones de la DC.

Más aún durante ese mes se fortalecen las oposiciones en principio a la negociación. Su manifestación culminante es la declaración del Pleno del PS en que se propone el envío de un nuevo proyecto constitucional donde se nacionalizan todas las empresas cuyo capital y reservas al 31 de diciembre de 1971 sobrepasan a los catorce millones de escudos y se permite la expropiación de todos los predios de más de cuarenta hectáreas de riego básico. El PC rechaza explícitamente esta posición por considerarla en contradicción con el Programa de la UP, y reafirma el valor y contenido de éste.

En el mes de junio las conversaciones fracasan definitivamente. Al no llegarse a acuerdo entre los negociadores en la fecha en que comenzaba la discusión parlamentaria, el Presidente busca el entendimiento directo con la directiva de la DC. Esas conversaciones ocupan quince días durante los cuales se paraliza la discusión en el Senado. El punto central de desacuerdo es de nuevo el problema de las empresas de trabajadores. La DC pide que un conjunto de empresas, entre las cuales estaban algunos bancos importantes, no se incorporen al área estatal, sino que formen un sistema de empresas autogestionadas.

Sin embargo, no hay que pensar que estas conversaciones que constituyen el principal eje de la coyuntura se realizan en un clima de pacificación política. El hecho que ello no haya ocurrido demuestra que esas conversaciones resultan de la percepción de un enfrentamiento posible. De hecho los discursos y los temas predominantes en esta fase están colimados de ese tipo de premoniciones. En primer lugar, en esta coyuntura —con mucho más intensidad que en ninguna otra— las fuerzas opuestas se niegan unas a otras la legitimidad legal. De hecho, una gran marcha opositora en el mes de abril tiene como tema la ilegalidad del gobierno. Si se recuerda que la concentración de diciembre de 1971 fue convocada en torno al tema del desabastecimiento se puede apreciar la significación de la variación.

Por otra parte, a partir de la aprobación por el Congreso del proyecto de reforma constitucional, la Derecha —quizás habiendo perdido ya la cautela provocada por las tendencias pendulares de la DC— empieza a constituir el tema del derrocamiento, a través de la consigna de la desobediencia civil, que circula en el mes de abril o, un poco más tarde, a través de llamados al derrocamiento constitucional. El grupo extremista Patria y Libertad empieza a hablar de un Gobierno militar de corte nacionalista, como la única salida de la crisis política. Al mismo tiempo, se hacen algunos intentos de mezclar a las FF AA. en el debate político. Así, El Mercurio denuncia tentativas de infiltración comunista que se realizarían a través de activistas juveniles.

La DC toma distancia frente a lo que llama la oposición por la oposición y señala que no está dispuesta a dejarse mezclar en ninguna aventura golpista. Indica que la búsqueda del consenso negociado es la única forma de encontrar una salida pacífica a la crisis política en desarrollo.

Para el Gobierno y para la UP la apertura de conversaciones con la DC debía realizarse en el marco de una ofensiva destinada a llevar adelante el Programa. En eso no hay sólo una táctica de negociación, sino también una respuesta a los sectores internos reticentes que ven en cualquier compromiso una transacción inaceptable. Por otra parte la presión de base para intensificar la Reforma Agraria o para ampliar el área de propiedad social surgía espontáneamente, ya sin necesidad de una manipulación desde arriba. La incorporación al sector estatizado era vivida como una necesidad ineludible, como un momento de liberación por muchos trabajadores, y la participación activa en crear condiciones que la hicieran posible es vista como el ejercicio efectivo del poder obrero. Esto no ocurría siempre como resultado del activismo Izquierdista, sino que era la expresión de una conciencia espontánea, de un deseo de sentir pasar cerca la revolución dentro de la cual se creía vivir, al mismo tiempo que era la expansión de las dificultades objetivas que afectaban a los sectores obreros de las empresas pequeñas y medianas cuya expropiación no contemplaba el Programa de la UP.

En todo caso el Gobierno realiza, en estos meses de negociaciones, una ofensiva de realizaciones. Intensifica la Reforma Agraria y continúa adelante con la constitución del APS, tratando de incorporar al máximo de empresas incluidas en la lista de las 91 susceptibles de estatización. Al mismo tiempo estimula la creación de las JAP, pese a las protestas de la Oposición que ve en ello una táctica para controlar políticamente la alimentación o el primer paso hacia un sistema de racionamiento.

Es evidente que estas medidas dificultan las condiciones de un acuerdo con la DC, porque todas ellas producen un clima de polarización de masas. Además, esta ofensiva de la UP se desarrolla en un momento en que la crisis económica había estallado. Los sectores medios enfrentan dificultades de abastecimiento, la SOFOFA anuncia una inflación galopante y Allende reconoce elementos de crisis económica y anuncia medidas de superación de la situación. Todo ello desencadena una ola de huelgas cuyo punto de mayor intensidad fue el mes de mayo. Allí se suceden huelgas en las empresas de la gran minería nacionalizada y huelgas en una serie de organismos estatales, algunos de ellos de utilidad pública. La reivindicación central de todos esos movimientos es de carácter económico.

La UP, palpando ese clima de deterioro buscaba hacer coincidir su unidad interna, la necesidad de satisfacer prioritariamente a su base obrera y popular, sensible frente a las medidas que afectan sus condiciones de trabajo, y la necesidad de llegar a compromisos con la DC. Pero aún los sectores más partidarios de la negociación estaban cercados y acotados por los requisitos de la unidad interna que, por primera vez en el período, se ve puesta a prueba seriamente. A su vez la DC, que ve en el fracaso de las conversaciones una fuente potencial de polarización y de enfrentamientos, estaba también acotada por un movimiento de radicalización que ve surgir entre sus propias bases de apoyo.

Por ello esta negociación, tan importante para las partes implicadas, se realiza en un clima ideológico y político que la hacía difícil. Por cierto que muchos de los enfrentamientos parciales ocurridos en la fase no son planificados. A parte de la ola de tomas en la provincia

de Ñuble, dirigidas por el MIR, se producen dos importantes incidentes sufridos casi espontáneamente o, por lo menos, sin que la intención de sus patrocinadores fuera llegar a los puntos de tensión en que se derivó. Uno de esos ocurre en Melipilla como resultado del encarcelamiento, considerado injustificado por los campesinos, de cinco dirigentes. El origen fue una orden de desalojo de un fundo ocupado, a partir de la cual el juez local ordena la aprehensión de los dirigentes. La crisis del conflicto se produce cuando un grupo numeroso de campesinos ocupa por fuerza el local del juzgado, haciendo necesaria la participación de autoridades de gobierno. Este acontecimiento permite un nuevo enjuiciamiento respecto a la legitimidad legal del Gobierno, con la activa participación del gremio de abogados.

Otro hecho grave ocurre en Concepción. Ahí la situación fue mucho más grave. Durante dos días, a propósito de la autorización para marchas políticas simultáneas, las fuerzas de la UP -menos el PC y el PR- y de la Oposición se enfrentan directamente mientras los policías tratan de imponer el orden y de neutralizar a los bandos combatientes. Los llamados del Presidente para que se abandonara la violencia, dirigidos especialmente al MIR, fueron desoídos.

Los sucesos de Melipilla y Concepción, que evidentemente favorecen a los sectores que rechazaban las conversaciones, constituyeron crisis que escapaban al control institucional, no sólo en el sentido que se trataba de conflictos que no eran normados por la ley, sino en el sentido que escapaban a la planificación y al control de las fuerzas que los originaban. Concepción es un caso claro de violencia que se autalimenta y donde los sucesos tienen el erratismo de la espontaneidad y de la falta de dirección, se trata de explosiones donde la violencia tiene mucho de combate expresivo: no se trata tanto de morir o matar como de demostrar que se es tan fuerte como el adversario.

La crisis de octubre se presagiaba pero todavía había un camino por recorrer. Al final de la fase, en el mes de junio, se produce un paro de los comerciantes detallistas. El incidente que lo desencadenó fue, también bastante trivial. Con motivo de un aniversario los comerciantes convocan a una concentración con suspensión de actividades al

mediodía. El Gobierno autoriza el acto pero prohíbe el cierre de los locales. Al no acatarse la decisión algunos inspectores multaron a los comerciantes infractores. Este acto administrativo desencadena un paro del comercio y una vasta ofensiva cuya temática central era la persecución por parte del Gobierno contra el comercio privado, con el objeto de reemplazarlo por las JAP.

Es evidente que éstas no fueron nunca las intenciones del Gobierno, que sólo intentaba enfrentar el acaparamiento y regular el abastecimiento en los sectores populares a través de sus organizaciones. Además, era fácil darse cuenta que la temática no correspondía a la realidad porque el grado de dispersión y de atomización de las empresas comerciales hacía muy difícil su estatización. Sin embargo, lo revelador es que esta temática haya podido extenderse. Ello demuestra que existían en las capas medias fermentos de movilización disponibles. Este fenómeno revela el fracaso de la alianza de clases en que la UP pretendía sostenerse.

En el mes de junio tiene lugar la segunda reunión de autocrítica de la Unidad Popular, llamada el Cónclave de Lo Curro, en que se manifiestan discrepancias internas que fueron expresadas en el dilema consolidar o avanzar. La repercusión más importante de estas reuniones es el cambio de la política económica del Gobierno, que acoge las críticas planteadas principalmente por el PC a la política encarnada por el Ministro Vuskovic y que resulta en un reemplazo del mismo. El representante principal del PC en el debate crítico que precede al Cónclave, Orlando Millas, asume el rol preponderante en la conducción económica. Los efectos principales de este viraje económico serán analizados más adelante. Por el momento basta señalar que, pese a los acuerdos formales logrados, la discusión sobre el sentido de la política económica expresa diferencias importantes que resurgirán a lo largo del período.

El último hecho significativo de esta coyuntura está constituido por las elecciones de directiva de la CUT por parte de todos los trabajadores afiliados a este organismo. Su significación radica, por un lado, en la corroboración de la fuerza política de la Izquierda en la

masa trabajadora, pero también en la importancia de la votación de la DC, lo que le permite a ésta reafirmar su carácter popular y mostrarse ante la Derecha con una base de sustentación de la que ella carece en absoluto.

6. DEL FRACASO DE LAS CONVERSACIONES GOBIERNO-DC HASTA EL DESENCADENAMIENTO DE LA CRISIS DE OCTUBRE (JUNIO - SEPTIEMBRE 1972)

La nueva coyuntura abarca entre junio y septiembre de 1972, momento este último en que se inician los conflictos que paralizaron el país durante el mes de octubre. Ella representa la culminación y al mismo tiempo el cierre o el final de una etapa en la lucha política. Los meses anteriores constituyen la preparación progresiva de las condiciones inmediatas de la crisis de octubre.

El fracaso de las conversaciones entre la DC y el Gobierno a fines de junio define el carácter del conflicto político en el mes siguiente. Este es, de algún modo, la prolongación del debate y de sus conflictos que habían tenido lugar en junio. Las conversaciones destinadas a encontrar una solución negociada y su posterior fracaso, le dan a julio el carácter de mes bisagra, una fase aislada de interludio. Este mes tiene dos ejes principales: el rechazo por parte del Senado de los vetos presidenciales y el resquebrajamiento de la unidad de los dos bloques en conflicto.

El primer eje está revelando el predominio político de la DC dentro de la posición. Los conflictos continúan planteados en un nivel institucional que es el terreno donde esta fuerza desea llevarlos. Sin embargo, la culminación del proceso de discusión parlamentaria del proyecto sobre las áreas de la economía significa, simultáneamente, el impasse de esta táctica. El Gobierno sostiene la tesis jurídica que los vetos deben ser rechazados por los dos tercios de los parlamentarios en ejercicio. Como esta mayoría no es alcanzada, recurre al Tribunal Constitucional, sosteniendo que si éste se declara incompe-

tente promulgará aquellas partes de la ley en que se ha alcanzado un acuerdo en las negociaciones precedentes. A su vez la Oposición niega la legalidad de esta fórmula, insistiendo en la necesidad del plebiscito como única salida del impasse.

El carácter del mes está definido por la incapacidad de la Derecha de arrastrar a la DC en una línea de enfrentamiento directo. De hecho, en julio se consolidó formalmente la unidad política de la Oposición a través de la constitución de un frente electoral (CODE) en vista a los comicios de marzo de 1973, para elegir senadores y diputados. Sin embargo detrás de esta fachada existen conflictos de línea que estallan durante este mes. Las manifestaciones inmediatas de esta situación son el conflicto para la constitución de una lista unitaria para las elecciones de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH) y, en menor grado el debate de carácter ideológico que opuso al Presidente del PN y a uno de los principales publicistas democratas-cristianos. El énfasis del discurso de estos últimos era señalar la especificidad de su perspectiva, haciendo actuar siempre un doble principio de oposición, respecto al Gobierno y respecto a sus aliados.

Detrás de esta crisis de la unidad tan esforzadamente trabajada hasta entonces, existían problemas de fondo que se habían expresado de diferentes maneras a través de cada coyuntura. Para el PN las conversaciones sostenidas entre la DC y el Gobierno desde marzo a junio son la prolongación de lo sucedido entre septiembre y noviembre de 1970, y revelan el mismo tipo de conducta política. Por ello, para la Derecha cualquier avance cualitativo de la lucha contra la UP requería resolver el problema planteado por la dualidad de la DC.

Desde el punto de vista de la UP y del Gobierno este primer momento de la coyuntura tiene un doble rostro. Por una parte, la Izquierda logra dos importantes triunfos electorales. Uno de ellos en la elección complementaria de un diputado en la provincia de Coquimbo, donde la Oposición unida fue representada por un candidato del PIR, y el otro en las elecciones de la FECH donde la DC y el PN fueron en listas separadas. Evidentemente que estos triunfos permiten crear la sensación de que se revierte la tendencia al deterioro,

manifestada en las confrontaciones electorales después de abril de 1971.

Pero, por otra parte, estas tendencias son anuladas por la aparición de serias contradicciones internas en la UP. En ese terreno el estallido culminante fue la llamada Asamblea del Pueblo de Concepción. Todas las fuerzas de la UP al nivel provincial, con excepción del PC, y con la inclusión del MIR, se reunieron para realizar una severa crítica a la conducción política del proceso y proponer una línea alternativa. Allí se propone la disolución del Congreso y su reemplazo por una Asamblea del Pueblo. Esa iniciativa política revela por primera vez la presencia de un concepto que más tarde tenía mucha importancia en el debate teórico. De hecho en la reunión Concepción se mezclan la proposición de una serie de medidas de reforma política con la metodología de construcción de un nuevo poder. Para los actores implicados, Concepción era el símil de Petrogrado en tiempos de la revolución bolchevique y la Asamblea provincial era el equivalente del Comité Ejecutivo de los Soviets. En realidad, lo que ellos pretendían era mucho más que proponer un plan de reformas del sistema político, las cuales ya habían sido descartadas por el rechazo parlamentario del proyecto sobre la Cámara Unica (13). Lo que tienen en vista es proponer una estrategia de construcción socialista sobre la base de desarrollar progresivamente la dualidad de poderes, que permita gestar y manifestar la caducidad del viejo aparato estatal.

(13) Este proyecto tuvo una corta experiencia parlamentaria. Fue presentado el 16 de noviembre de 1971 y rechazado en la comisión el 21 de diciembre del mismo año. Esto hizo al Ejecutivo desistir de la tramitación posterior. Las principales modificaciones que pretendía ese proyecto eran: reemplazar las dos Cámaras por una Cámara Unica cuya elección coincidiría con la del Presidente, permitir la disolución de la Cámara por una sola vez, eliminar el carácter vitalicio de los Ministros de la Corte Suprema. Con esto se pretendía aumentar la capacidad de acción del Ejecutivo y permitir una mayor agilidad de los trámites parlamentarios.

Estos planteamientos son rechazados explícitamente por el PC y el Presidente Allende, los cuales tratan de situar el debate en el terreno de los problemas concretos que entonces se enfrentaban.

Pero además de estas manifestaciones explosivas, las discrepancias internas de la UP tienen otras formas de aparición. Algunas de ellas son el Informe Central al Pleno del PS, donde se trata de legitimar la búsqueda de nuevos caminos estratégicos como una respuesta a la situación de crisis que se vivía; el descubrimiento de grupos de ultrazquierda, escindidos del PS, que estaban implicados en actos delictuales, pero según la Oposición, en un complot contra el Gobierno las tomas de industrias en el sector Cerrillos, pese a los llamados presidenciales para terminar con ese tipo de actos.

El mes de agosto constituye una rara mezcla entre las características del pasado reciente y del futuro próximo. Cuatro son los ejes de ese momento coyuntural: a) la expansión de los problemas en la UP; b) los efectos del cambio de política económica; c) la agitación gremial y la mayor unificación de la Oposición; d) la violencia política en desarrollo.

Este momento coyuntural está fuertemente marcado por la agudización de los problemas internos de la UP. El debate a propósito de la Asamblea del Pueblo realizada en Concepción en julio, azota a la UP con gran fuerza durante todo este mes. La situación se hilvanó del siguiente modo: a fines de julio Allende se reúne con los jefes de los partidos y les hace entrega de una carta. En ella se intentaba una ardorosa defensa de lo que Allende había definido como las características centrales del proceso chileno: desde el punto de vista estratégico, necesidad de defender la institucionalidad y reivindicar para la Izquierda la defensa de la democracia; desde el punto de vista táctico, importancia decisiva de la batalla electoral parlamentaria de marzo de 1973 y de la superación de la crisis económica. Para todo ello era indispensable -según Allende— fortalecer la unidad de dirección y la disciplina interna. En el curso del mes, los diferentes partidos fueron respondiendo al Presidente en lo que este llama un bello abanico de opiniones. El PS responde de modo indirecto mediante un llamado a

acusar constitucionalmente a la Corte Suprema. Aunque de ese modo el PS no se pronuncia sobre el fondo del problema, la elección de la problemática muestra una discrepancia —por lo menos— táctica. Mientras Allende llama a enfrentar con realismo las tareas económicas y electorales el PS parece estar interesado en la agudización del conflicto político.

Sin embargo, el acontecimiento más explosivo en las relaciones entre los partidos de la UP, es provocado por el enfrentamiento entre pobladores y policia civil en el Campamento Lo Hermida, a propósito del cual muere un poblador. Esta situación provoca la siguiente cadena de hechos: un virulento ataque del MIR al Gobierno, donde se pretende mostrar lo sucedido como una consecuencia de la política de conciliación centrada de la UP; la condenación por parte del PS a la actitud del Gobierno y principalmente del Ministro del Interior, que militaba en sus filas; al análisis del PC, que caracteriza lo ocurrido del modo exactamente contrario al del MIR, como una provocación extrema; la destitución por parte del Gobierno de los principales jefes de Investigaciones; la visita de Allende a Lo Hermida, donde es enfrentado por los pobladores.

Es evidente que para la UP la muerte de un poblador a causa de la represión policial constituye un serio quebranto político. Sin embargo, el impacto público del evento y la significación política que se le atribuyó dependieron, en primer lugar, de la agitación producida por la prensa opositora y, en segundo lugar, de la ofensiva en que esta empeñó el MIR. Si la reunión de Concepción era un intento de constituir un bloque de dirección alternativa del proceso, la tematización de los sucesos de Lo Hermida en la línea seguida por el MIR tiene el mismo sentido.

La verdad es que, al margen de los problemas de factibilidad política que pudiera haber tenido la aplicación de esa otra línea, por otra parte siempre estuvo sólo germinalmente esbozada—, la agudización de la crítica interna, era también el resultado lógico, quizás subjetivamente planteado, de los graves problemas que se enfrentaban. El mes de agosto es el momento del cambio de la política

económica y de la aplicación del modelo que se llamó de estabilización en otro nivel. La consecuencia de ese viraje fue que se sumó a los problemas de desabastecimiento una pequeña pérdida del poder adquisitivo en relación al año anterior, en que éste había crecido significativamente para los sectores populares. Pero, además de estos aspectos que afectaban a todos, incluída la base de apoyo popular del Gobierno, lo más grave es el significado ideológico y político del viraje: la presencia irrefutable y reconocida de una crisis y la convicción de que la política anterior había tenido una parte importante de la culpa en el desencadenamiento.

El llamado "plan Millas" (nombre del nuevo Ministro de Economía), con un énfasis mayor en la estabilización, opera entonces como un factor catalizador de un conjunto de descontentos latentes, tanto más graves cuanto se le asigna a ese plan económico el sentido de una estrategia política global. Evidentemente que ese conjunto de medidas técnicas forman parte de una línea, que era -en grueso- la de Allende y del PC, pero también ellas son independientes del plan político y constituyen un intento de respuesta a una crisis económica producida como consecuencia del impacto redistributivo, del aumento del gasto fiscal, del copamiento de las capacidades instaladas ociosas, de la falta de nuevas inversiones, de la caída de la tasa de ahorro de los problemas del comercio exterior y, last but not least, de la desarticulación del sistema económico capitalista sin un reemplazo efectivo por una alternativa. El plan político existía y estaba conectado con el económico, pero ambos son separables: se buscaba el equilibrio político sobre la base de una estabilización de los niveles de conflicto. Sin embargo, pronto los hechos demostrarían que esa posibilidad estaba sobrepasada.

Lo verdaderamente expresivo de los movimientos del futuro que se venían gestando fue la intensa ola de agitación gremial que se vive en este momento de la coyuntura. Una vez más un pretexto irrelevante juega el papel de detonador. El escenario del incidente trivial que desencadena el conflicto es el extremo sur: en una rutinaria visita de inspección de inspectores del organismo fiscalizador de industria y comercio (DIRINCO) en un local de Punta Arenas fallece de ataque

al corazón el propietario del negocio donde se ejercía la acción de control. Al día siguiente se realiza un paro nacional del comercio en protesta contra la persecución del Gobierno. De hecho, no era primera vez que este tipo de acción se realizaba con el mismo motivo: los propietarios agrícolas habían citado a una huelga nacional de protesta por la muerte de uno de ellos durante la toma de posesión de su fundo por la CORA. Sin embargo, la magnitud de la empresa intentada por los dirigentes del comercio es mucho mayor. En primer lugar, existía una gran diferenciación interna entre los comerciantes, y graves contradicciones de intereses entre los grandes propietarios de supermercados o de grandes tiendas, y el pequeño comerciante de barrio asfixiado por la competencia que copaba todos los puntos estratégicos urbanos. Quizás por eso mismo había existido una fuerte hostilidad entre las organizaciones gremiales que agrupaban a estos dos sectores.

Sin embargo, el hecho que un pretexto tan artificial como el elegido desencadenara, de un día para otro, un paro nacional está revelando dos cosas: la existencia de un potencial de movilización y la existencia de un alto nivel de organización.

Como ya dijimos esta -potencialidad de agitación y movilización que brota en esta coyuntura entre sectores sociales que nunca habían jugado un rol significativo como factores de poder político, demuestra que se sintieron amenazados por la UP en algunos puntos de especial vulnerabilidad. Eso permite que pequeños y grandes comerciantes actúen bajo una dirección única o, por lo menos, coordinada.

De todos modos, este es el caso típico de aquellos conflictos que se alimentan de los incidentes iniciales. En este caso el Gobierno respondió con extraordinaria dureza: ordena descerrarajear negocios y aplica las leyes de represión política a los dirigentes gremiales y la ley de extranjería a los comerciantes foráneos implicados. Todas estas medidas sirvieron para cohesionar a los comerciantes y para ir radicalizando las posiciones, tanto en la cúpula como en la base. Finalmente se llega a un acuerdo por intervención de los presidentes de ambas ramas del Congreso. El otro signo de todo este momento

coyuntural es el fuerte recrudecimiento de la violencia. Es ilustrativo recorrer, aunque sea rápidamente, la secuencia de hechos: se produce un enfrentamiento por la requisición de la principal Compañía de Gas (GASCO), donde se enfrentan obreros y empleados partidarios y opositores de la medida; la lucha entre policía civil y pobladores deja como saldo un muerto y varios heridos en el Campamento Lo Hermita; muere accidentalmente un comerciante en Punta Arenas, lo que desencadena una reacción de violencia en la provincia; enfrentamiento con heridos en Concepción entre jóvenes de la DC y de la UP; tres campesinos son asesinados por ex-propietarios en la provincia de Valdivia; un campesino socialista muere en un choque callejero en la provincia de Bío-Bío; destrucción de locales comerciales, incendios y barricadas en Santiago; atentados de grupos paramilitares de Derecha contra los domicilios de dos Ministros; enfrentamientos en Concepción, donde es asesinado un cabo de carabineros.

Desde el principio del Gobierno de la UP, la violencia había jugado un cierto rol político. Sin embargo, se trataba de hechos aislados que sucumbían ante el peso de las presiones de institucionalización; las fuerzas principales trataban de mantener los conflictos en un marco donde la discrepancia con lo legal fuera tolerable o donde siempre hubiera una instancia de arreglo negociado. Pero a medida que la UP desarrolla su programa, intensificando la Reforma Agraria y creando el APS, a medida que aparecen signos de desarticulación inevitable cuando se intentan reformas estructurales de tal magnitud, a medida que se ensancha la polarización ideológica, se va debilitando también la base de legitimidad y consenso sobre la que siempre se sostiene una regulación institucional del conflicto.

El mes termina anunciando la temática central de septiembre: la existencia de un plan para derrocar al Gobierno. Durante el período y también en los últimos años del Gobierno de Frei, el mes de septiembre había puesto en el tapete el tema de las FF.AA., como si las Fiestas Patrias y la parada militar del 19 de septiembre las sacaran del relativo olvido público en que estaban durante el resto del año. Pero tanto en 1971 como en 1972 ese tema estuvo mezclado con rumores y

acusaciones públicas respecto a la preparación de un golpe. El llamado a retiro de un General de Ejército revela que existía cierta participación castrense en los intentos de empujar al derrocamiento de Allende, pero la posibilidad militar era todavía muy incipiente. Tan sintomático como ese incidente es el debate provocado por un planteamiento de El Mercurio respecto al papel de las FF.AA. como garantes y árbitros de la legalidad y constitucionalidad. El Ejército responde a través de su Comandante en Jefe, reiterando que las FF.AA. son obedientes al Gobierno constitucionalmente elegido.

Aunque la temática del mes está referida al golpe, bien para negarlo o para denunciarlo, el clima político es menos intenso que en agosto, pese a los violentos enfrentamientos entre estudiantes secundarios que durante dos días agitaron a la ciudad de Santiago. Se trata de un mes de expectativa y de medición de fuerzas o de sondeo respecto a las opiniones militares.

Hacia el final del mes se constituyen en algunas ciudades del Sur (Los Angeles y San Javier) comandos gremiales que decretan paros en sus respectivas provincias: esos movimientos parciales, ligados a problemas de la región, muchas veces tan triviales y arbitrarios como los anteriores, servían para ir creando el clima emocional que necesita un movimiento de larga duración y para ir ensayando formas de organización. La crisis de Octubre estaba ad portas.

LA CRISIS DE OCTUBRE DE 1972.

La importancia y significación de esta crisis obliga a su tratamiento como coyuntura aparte, aún cuando debe verse también como culminación de la fase anterior.

¿De qué tipo de crisis se trata? Digamos algunas cosas preliminares que nos permitan contestar algunas preguntas relacionadas con ésta. Como veremos al describir el ritmo interno del conflicto, esta crisis se desencadena y mantiene sobre la base de la organización y movilización de sectores de capas medias, sean ellos comerciantes, transportistas, profesionales y también estudiantes secundarios. ¿Cómo alcanzan esas capas los niveles de organización y el estado ideológico que se requiere para incorporarse activamente a un movimiento de tan largo aliento? Un triple proceso explica la situación producida.

En primer lugar, las capas medias son sumidas en un clima de enorme inseguridad como consecuencia de la estrategia de reformas económicas. Aunque el Gobierno no perdía ninguna oportunidad propicia para reiterar garantías a los pequeños y medianos empresarios, las tomas de pequeños predios o de pequeñas industrias -la mayor parte espontáneas, aunque a veces estimuladas por grupos de extrema izquierda—contradecían a menudo esas promesas. Pero, en este terreno, la fricción más importante fue creada por los problemas de abastecimiento y la necesidad del Gobierno de desarrollar formas de control popular que produjeron inevitables choques entre las organizaciones populares y los comerciantes. Por otra parte, la aparición de problemas de abastecimiento indujo a una cierta politización de las relaciones entre las agencias estatales de abastecimiento y los comerciantes. Las primeras requerían asegurarse contra

las tendencias especulativas y para ello favorecían a los comerciantes vinculados con las JAP.

Además, los sectores de las capas medias ligados a la economía capitalista, sea como rentistas o como propietarios, empiezan a ver como consecuencia de la intensa campaña publicitaria y de la síntomas que advertían en la acción de Gobierno—una amenaza global contra la propiedad privada.

En segundo lugar, la significación social de las capas medias en Chile dependía de los roles políticos privilegiados que había asumido desde la década del 20. Los procedimientos políticos de la UP, en especial su tendencia a sobrepasar el esquema formal de poder contrabalaceado del cual surgían las necesidades de negociación y el gradualismo del cambio social, eran fácilmente interiorizados como una amenaza contra esa tradición preeminencia o significación política. Esa estrategia impedía que las capas medias jugaran a través de sus representantes políticos—esos roles pendulares que le otorgaban la posibilidad de múltiples combinaciones para realizar sus intereses.

Por último, el estilo político de la UP chocaba contra el universo cultural de las capas medias. El elemento obrerista del discurso UP, y reivindicación del pueblo como sujeto de la política no era compatible ni con el elitismo de las capas medias, con su respeto idólatrico por los educados y la educación; ni con su lucha permanente por defender las fronteras que debían separar a las capas medias de el obreros y del pueblo; ni con su ideología meritocrática y su convicción que la condición social de cada uno reflejaba su capacidad, su disciplina o su laboriosidad. El elemento revolucionario del discurso de la UP también chocaba con los rasgos autoritarios que se manifestaban a cada paso como un elemento ideológico importante entre las capas medias, su rechazo del desorden y de la agitación, tras lo cual actuaba una concepción naturalística de las desigualdades sociales.

Además, el cuadro de crisis y el clima emocional hacían creíble el razonamiento de que el gobierno no tenía otra salida autónoma—sin

negociación- que una radicalización política y del plan de reformas socializantes. Esto le permitió a la propaganda opositora expandir el tema del totalitarismo y de la quiebra democrática como un horizonte posible.

La crisis económica que empezó a desplegarse desde fines de 1971 y el clima de violencia y de agitación provocado la mayor parte de las veces por la propia Oposición, le daban la verosimilitud a todos estos temas. La quiebra de la normalidad cotidiana a causa de connotados huelguísticos, de asonadas estudiantiles de Oposición y - sobre todo- la desarticulación de los canales normales de abastecimiento alimenticio, también por acaparamiento y especulación de industriales y comerciantes, fueron generando una radicalización ideológica que iba siendo acompañada por una creciente radicalización política.

Sin embargo en este terreno el proceso era lento, desigual y discontinuo. Los sectores más impacientes por paralizar o derrocar al Gobierno se daban cuenta que la DC estaba siempre buscando compensar los pasos que daba hacia la unificación de la oposición y que las fluctuaciones de su línea se debían a su carácter organizacional. Estas constataciones, que los discursos políticos de la Derecha reflejaban a cada paso, se relacionaban estrechamente con el problema de las fuerzas motoras internas de la movilización de Octubre(14).

Allí lo característico es el papel asumido por las organizaciones gremiales de comerciantes (Cámara Central de Comercio, para los grandes y la Confederación del Comercio Detallista, para los pequeños), de transportistas, de empresarios agrícolas (SNA, CAS, Confederación de Empleados Agrícolas), de industriales (SFF), de los constructores (Cámara Chilena de la Construcción) y de técnicos y profesionales en sus Colegios respectivos, cuyas acciones eran coordinadas por la Confederación de la Producción y del Comercio y por

(14) *La intervención externa, en el Paro de Octubre, ha sido suficientemente estudiada y no será analizada aquí. Cfr. "Covert Action..." (op. cit.)*

el Frente Nacional de la Actividad Privada. El papel predominante de ese conjunto, habitualmente disperso y atomizado a causa de la diversidad o contradicción de sus intereses corporativos, revela, en primer lugar, la existencia de una fusión de intereses, producto de un trabajo político de articulación entre las reivindicaciones de cada gremio; revela una considerable ampliación de los niveles de organización de cada uno, de su capacidad de penetración al nivel nacional, especialmente notable en el caso del gremio de los comerciantes detallistas, revela, finalmente un trabajo de creación de formas de coordinación (Comandos multi-gremiales) y de acción agitada (el uso de tácticas guerrilleras de hostigamiento constante, de parques de camiones de huelga que constituían focos de refuerzo emocional y de transmisión de directivas, etc.) que no tenía precedentes en la historia política de esos gremios.

Por otra parte, el rol predominante que ellos entran a jugar tenía un papel táctico de primera importancia y no sólo era la consecuencia de la radicalización y de la disposición a la acción de esos grupos. Su forma de operación demuestra la conexión entre los líderes de esas organizaciones y el PN. Transformar a los gremios en fuerza desencadenante permitía legitimar al movimiento frente a la DC, despojándolo aparentemente en las acciones iniciales de su conexión con un plan político de derrocamiento, o permitía generar las condiciones para que ésta se viera obligada a entrar en un movimiento que no podía paralizar desde fuera. En el diseño político global la DC era necesaria porque ella podía aportar movilización de campesinos y de obreros industriales que demostraban el deterioro de la base popular del Gobierno -su principio de legitimidad— y el carácter nacional de la oposición.

Veamos cuál es el ritmo interno de la crisis, tratando de precisar los principales momentos o subetapas dentro de ella.

El primer momento abarca entre el 1° y el 8 de octubre. Durante la subetapa se inicia el movimiento a través de planteamientos donde los gremios explicitan sus plataformas y su voluntad de acción pero todavía los paros y las huelgas tienen una amplitud regional. La

consecuencia de hechos es la siguiente: 1) los principales gremios se dirigieron al Presidente para anunciarle la realización de un paro nacional si el Gobierno no resolvía la situación financiera de la Papelera, perjudicada —según los requerimientos— por una política de precios discriminatorios; 2) los gremios de comerciantes amenazaron con realizar una huelga nacional si se mantenía la idea de crear un estanco de línea blanca; 3) los dueños de camiones amenazaron con realizar un paro nacional si se creaba la empresa estatal de Transportes en Aysén; 4) el gremio de transportistas de esta provincia austral se declara en huelga, siendo apoyado en los días siguientes por los camioneros de las provincias del Sur, desde O'Higgins hasta Malleco; 5) los estudiantes secundarios salieron a las calles provocando destrucciones materiales y un clima caótico.

El análisis de las reivindicaciones de los gremios en ese momento apunta aspectos interesantes: ellas tienen un carácter particular, cada organización agita —como si no existiera ninguna coordinación— sus propias consignas corporativas. El punto unificador tiene claro carácter parcial (mejores precios para la Papelera) y no poen cuestión ni la legalidad ni la legitimidad del Gobierno.

Este último estaba sumergido en otra temática, tratando de crear conciencia nacional sobre las consecuencias de la agresión de la Kennecot. Esta empresa cuprífera había anunciado en el mes de septiembre su retiro del Tribunal Especial del Cobre que discutía los montos de las indemnizaciones y su voluntad de boicotear el comercio mundial del cobre chileno. Al principio, el Gobierno pareció darle poca importancia al movimiento que se gestaba, centrándole sus argumentos en el carácter limitado de la iniciativa de Aysén.

El segundo momento abarca entre el 9 y el 12 de octubre. Corresponde a la fase en que el movimiento desborda el ámbito regional y se hace nacional. El día 9 la Confederación de Dueños de Camiones inicia un paro nacional de duración indefinida por la nula respuesta a sus reivindicaciones gremiales. Estas reivindicaciones se refieren a precios de carga, abastecimiento regular de repuestos que se había hecho dificultoso por la situación de comercio exterior,

renovación del material rodante y créditos para su adquisición y también el rechazo al intento de crear una empresa estatal de transportes en Aysén. A esas reivindicaciones que se limitan al ámbito corporativo se le agregan algunas reivindicaciones políticas: el problema de los precios de la Papelera y la exigencia que se levantara la orden de clausura de una radio de Los Angeles. Es decir, las reivindicaciones políticas que se superponen a las otras todavía se refieren exclusivamente al problema de la libertad de expresión. Además plantean el tema de un modo puntual.

Al trasladarse el paro de los dueños de camiones del ámbito regional al nacional se produce una intensificación inmediata de la realidad del conflicto: hay bloqueos de carreteras y agresiones por parte de los huelguistas a los camioneros que no dejan de trabajar.

El Gobierno, igual que en el caso del paro del comercio de agosto reacciona con gran dureza. Declara el estado de Zona de Emergencia en diez provincias, las cuales quedan desde ese momento bajo jurisdicción militar, requisa camiones, ordena detener a los dirigentes gremiales.

En ese marco la Oposición realiza un acto de masas que había sido suspendido en septiembre por orden gubernamental se visualizan nítidamente dos discursos. El énfasis de la DC y el PN estaba puesto en la contienda electoral de marzo de 1973 como oportunidad de un enfrentamiento decisivo, el énfasis del PN esto en la crisis que se venía gestando. Según sus palabras había llegado la hora de la acción. Esos matices no son de detalle, detrás de hay dos estrategias, la de la DC que sigue creyendo en la necesidad de agotar todos los recursos institucionales, la del PN, que insiste en cambiar el espacio del enfrentamiento, usando la huelga general de la actividad privada como el desencadenante de un pronunciamiento militar.

El tercer momento abarca entre el 13 y el 16 de octubre. Esta subfase es la generalización del conflicto. La dureza de la reacción del Gobierno desencadena una ola de movimientos de solidaridad que comprendía a los colegios de profesionales y a las organizaciones

estudiantiles dirigidas por la oposición (estudiantes secundarios y de la Universidad Católica). La movilización de estos sectores juveniles multiplica los actos de violencia y los enfrentamientos directos con los jóvenes partidarios de la UP.

La DC se incorpora activamente en el movimiento, movilizándolo sus fuerzas disponibles, pero el sentido de la crisis corresponde al diseño de la Derecha. La generalización sólo cobra su plena lógica en la espera de un enfrentamiento decisivo, donde el caos de la paralización del país demuestre a los militares que son el único recurso de defensa de la institucionalidad. Pese a eso, la DC se ve obligada a incorporarse al movimiento para evitar aislarse de una masa a la cual la propia crisis radicalizaba. A través de su discurso trata de enfatizar los temas de la democracia y la libertad, para evitar un desbordamiento autoritario.

Sin embargo esta generalización es parcial y limitada. El movimiento no puede desbordar su base burguesa y de capas medias. Al mismo tiempo el Gobierno inicia en esta sub-fase la constitución de un aparato de emergencia, estructurado sobre la base de trabajo voluntario y de la movilización de profesionales, comerciantes y transportistas adictos que le permite mantener el sistema económico funcionando. Es decir, trata de evitar que se cumpla el objetivo de los sectores que buscaban activamente el derrocamiento.

La respuesta represivo legal que el Gobierno utiliza en la fase de desencadenamiento nacional es reemplazada por una movilización política, que no elimina las medidas de fuerza, pero que las subsume. La Izquierda vive estos momentos como una epopeya, sus masas son activadas, exigiéndose de ellas esfuerzos de iniciativa, organización y disciplina. La crisis supera las querrelas, refuerza la unidad en la base y en la cúspide; se esfuma el desconcierto y el pesimismo en que muchos sectores estaban sumidos por la sensación de impasse y de crisis.

El cuarto momento abarca entre el 17 y el 24. Durante este tiempo el conflicto llega a su clímax, es la fase del endurecimiento. Esta etapa está marcada por el ingreso al paro de los médicos, por la negativa de

Los Presidentes de ambas ramas del Congreso a dialogar con Allende. A este endurecimiento de la Oposición, el Gobierno responde cancelando la personería jurídica de la organización de empresarios industriales y de la Confederación de la Producción y del Comercio y desencadenando una nueva ola de requisiciones de empresa cuyos dueños habían paralizado sus actividades.

En vista de esto, los dirigentes del conflicto elaboran el llamado Pliego de Chile y lo transforman en la base de toda negociación para cualquiera de los gremios en particular ese documento significa el planteamiento del conflicto a otro nivel, puesto que la aceptación por parte del Gobierno de las exigencias que contiene, la mayor parte de ellas de naturaleza política, significaría aceptar su ilegitimidad. Es evidente que ese pliego no constituye una base posible de negociación. Sin embargo, es un recurso lógico en la perspectiva de la Derecha y además permite sujetar a los diferentes gremios. Algunos estaban fuertemente desgastados por quince días de huelga, y muestran disposición para negociar por separado.

Lo curioso es que el Pliego de Chile se hizo público en el momento en que la UP había llegado a la igualdad relativa de fuerza —por que se había demostrado capaz de impedir el caos, haciendo funcionar el país y evitando dejarse arrastrar a la violencia, y además estaba empezando a quebrar esa relativa igualdad consiguiendo el respaldo uniforme de las FF.AA. Los gremios en huelga habían agotado su poder de movilización y la DC no se había demostrado capaz de aportar sectores campesinos y obreros —lo que producía los mismos efectos prácticos— se había mostrado reitante en ese empleo.

El quinto momento abarca entre el 25 y el 31 de octubre. Su carácter es la declinación del conflicto. La Oposición acusa a cuatro Ministros, los gremios vuelven a amenazar con un endurecimiento el PN presenta un proyecto de acuerdo que declaraba la ilegalidad del Gobierno, pero estos actos y esos discursos forman parte de los ritos de una negociación compleja.

La configuración de un equilibrio inestable permite a la DC

retomar con más fuerza la temática de una solución institucional. Personeros políticos importantes de ella, como Tomic, sugieren la formación de un Gabinete que de confianza a la Oposición y que permita la realización pacífica de las elecciones parlamentarias de Marzo de 1973. El impasse en que cae la tática extremista del PN, por falta de apoyos militares orgánicos, le permite a la DC recuperar el predominio.

Al mismo tiempo el Gobierno, cuyas conversaciones con los gremios estaban suspendidas, abre el campo para nuevas negociaciones al aceptar sin tardanza un fallo de la Corte de apelaciones que pone fin a las cadenas radiales obligatorias.

Cada uno de los bloques en pugna se daba cuenta que no tenía fuerzas autónomas para inclinar la balanza a su favor. En este momento la DC empieza a mirar hacia la FF.AA., no como elemento de ruptura y quiebre, sino como elemento de regulación del conflicto desencadenando; también la Izquierda empieza a mirar en la misma dirección: la colaboración orgánica con las FF.AA. aparece a sus ojos como una fórmula viable para quebrar el movimiento y acumular fuerza para enfrentar la crisis venideras.

El sexto momento de la crisis abarca entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre. El 2 de noviembre asume un nuevo Ministerio integrado por militares y prominentes políticos de la UP, entre ellos el Presidente de la CUT. El 5 el comando Gremial da por terminado el paro, iniciándose las conversaciones de arreglo sólo después que los gremios retornan a sus labores. Esta fue una imposición del Gobierno, cuyo nuevo portavoz en las negociaciones era el comandante en Jefe del Ejército que oficiaba de Ministro del Interior.

Un nuevo actor se incorpora de esta forma al escenario del enfrentamiento de clases. ¿Cómo fue posible esta solución del conflicto, que comprometía a las FF.AA. con un Gobierno de Izquierda? Evidentemente fueron muy complejos los factores que determinaron esta conducta por parte de los militares. Entre los elementos que tuvieron influencia hay algunos que nos parece importante señalar.

Uno de ellos es la ideología constitucionalista. De hecho después del período de las intervenciones militares directas, entre 1924 y 1932, las FF.AA. vivieron reducidas a un rol profesional. La elite política se alzaba al unisono cada vez que aparecían síntomas o intentos sostenidos por parte de los militares—a veces dirigidos desde arriba, como durante el segundo período de ibañez entre 1952 y 1958—de actuar en política. El sistema político, basado sobre una alianza de clases de relativa extensión, con legitimidad y consenso amplio, pues creaba espacios para la participación en la negociación a variados sectores, había dado pruebas sostenidas de fortaleza y resistencia. Había conseguido estabilizar pautas de arreglo político, pese a las presiones que la participación creciente generaba sobre una economía capitalista de lento crecimiento y sometida a los vaivenes del comercio internacional. El sistema aparecía capacitado para regular los conflictos, demostrando una gran capacidad de absorción de tensiones.

El predominio de la ideología constitucionalista era el efecto de la fortaleza que mostraba el Estado y del recuerdo del caos político provocado por las intervenciones militares en la década del veinte, las cuales tuvieron un corte populista que no las hacía atractivas para la Derecha. Este aislamiento de los militares en el espacio profesional, sus dependencias múltiples respecto a la política, produjeron cierto tipo y estilos de socialización.

Ese enclaustramiento en las tareas propiamente castrenses definía el ámbito de la formación, de las preocupaciones, el horizonte cultural y mental de los militares, el cual estaba limitado a la esfera profesional y corporativa. Esto dificultaba la constitución entre ellos de proyectos políticos de consenso, pues sobre esas materias no existían opciones elaboradas.

Por ello, pese al desarrollo visible de una crisis económica, pese a que el sistema político parecía estar fallando en su razón central, la capacidad de regular los conflictos de acuerdo a normas comúnmente aceptadas, los militares no se encontraban en condiciones de generar unidad política interna sobre bases nuevas. El principio de unifica-

ción, apoyo al Gobierno constitucionalmente elegido, era todavía un principio tradicional, que históricamente correspondía a fases anteriores—de carácter moderado—de la lucha de clases.

Por otra parte, el Gobierno de la UP había modificado de un modo importante el estilo de relación entre las FF.AA. y el Ejecutivo. En los períodos de Alessandri y de Frei las FF.AA. sufrieron un fuerte deterioro de las remuneraciones y también de los niveles de adquisición y renovación de material. No eran apreciados como sectores significativos, pensándose quizás que su lealtad al sistema estaba asegurada. Es evidente que el triunfo de Allende convierte a las FF.AA. en un actor político significativo, aún en aquellos momentos en que se mantuvo fuera del escenario: ellas asumen de hecho el papel implícito de árbitros en última instancia de la situación política.

La UP incorporó a los militares activamente en las tareas de Gobierno—participación en los directorios de los minerales estatizados, dirección de servicios de utilidad pública, etc., elevó los niveles de ingresos de los oficiales y de la tropa y les permitió modernizar sus instalaciones y equipos. En esta relación la UP enfatizó las temáticas nacionales de su discurso, presentando el programa como la única forma posible de obtener un desarrollo acelerado y estable, sin multiplicar al mismo tiempo las desigualdades sociales.

Este cambio sustancial de la situación social de las FF.AA.; este tránsito del relativo aislamiento a la significación, pero también la multiplicación de los llamamientos a los militares como fuerza de reemplazo en el marco de una situación de crisis visible; y algunos elementos de su socialización en los últimos años, como las doctrinas de seguridad nacional con énfasis en la lucha antisubversiva; fueron haciendo surgir entre ellos, no sólo la discusión sobre problemas políticos, sino también los gérmenes de un proyecto autónomo. Este proyecto se manifestaba en esta etapa, en una forma primaria, a través de la convicción de que constituían la fuerza más legítima, cuya acción era la única que podía pacificar la situación política. Los militares aceptan para sí ese rol que se les asignaba desde fuera,

porque esa definición como reserva moral de la nación, era la que ellos siempre habían tenido de sí mismos.

En octubre las FF.AA. apoyaron un Gobierno constitucional amenazado, pero la aceptación de ese rol de sostén demostraba que en ellas estaba presente la idea de su significación política. Todavía no existía dentro de las FF.AA. La suficiente unidad de criterio respecto al carácter y magnitud de la crisis, como para abandonar los principios tradicionales de apoyo al Gobierno constitucional.

El error de la Derecha en esta crisis es no haber percibido el carácter incipiente que tenía el proyecto militar autónomo. Su impaciencia e ignorancia respecto a la mentalidad militar, no le había permitido percibir todavía el papel de legitimidad jerárquica dentro de las FF.AA. Los efectos internos de la crisis social no habían deteriorado seriamente esa legitimidad, por lo menos en el Ejército. Por otra parte, los sectores que buscaban el derrocamiento militar del Gobierno todavía no captaban la importancia que los militares acordaban a su unidad, como condición de preservación institucional. En síntesis, durante la crisis de octubre el sentido que la Derecha quería darle al movimiento no fue compatible con el ritmo alcanzado por la crisis militar.

¿Cómo fue posible que la Izquierda, no sólo aceptara, sino también promoviera la participación de los militares en su Gobierno? La definición generalizada de la situación dentro de la UP era que octubre reflejaba el fracaso de toda negociación con la DC, el retroceso entre sectores medios y populares que parecía estar provocando la crisis económica y las medidas de estabilización, y el desarrollo de una ofensiva que cambiaba el sentido de la lucha política, poniendo al Gobierno ante una situación de pre-guerra civil. Esta definición del carácter de la coyuntura fue la que permitió que—después de arduas discusiones—primara la posición de incorporar a los militares. Si la situación era tal como se describía, el punto nodal de la coyuntura era la resolución del problema militar. Las FF.AA. constituían una fuerza inestable que era necesario ganar, incorporándolas a las responsabilidades de Gobierno.

Pero esa incorporación fue pensada con un diseño distinto a un compromiso o a una alianza, que implicaran modificar el estilo de la acción política de la UP y también adecuar algunos objetivos, sino, más bien, como acumulación de fuerzas. El diagnóstico sobre el deterioro y sobre la emergencia de condiciones de guerra civil se diluye después de haber sido formulado. La incorporación de los militares fue pensada dentro de otro marco, como el aval de fuerzas necesario para continuar avanzando en la realización del Programa.

Esta mutación del análisis refleja el juego de contradicciones que se desencadenan dentro de la UP. Algunos sectores critican la medida porque expresa la búsqueda de una solución negociada a una crisis que tenía posibilidades revolucionarias, otros la critican porque conduce al Gobierno a la transacción. En ese campo de fuerzas, la unidad interna solo se produce si la incorporación de los militares al Gobierno representa la continuidad de la línea de la UP. La ingenuidad de las opciones revela que no se ha captado lo que está en juego. Los mismos que creen que la UP representa desde ya una revolución no se dan cuenta lo que una revolución significa en cuanto a las fuerzas que se ponen en tensión para destruirla.

TERCERA FASE: DE LA CRISIS DE OCTUBRE AL GOLPE MILITAR. (NOVIEMBRE 1972 A MARZO 1973).

1. DE LA RESOLUCION DE LA CRISIS A LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS (Noviembre 1972 a Marzo 1973).

Después de la solución de los conflictos alcanzada en los primeros días de noviembre, comienza una nueva coyuntura que se prolonga hasta las elecciones parlamentarias de marzo. Esta coyuntura, cuyo desarrollo está marcado por la proximidad de ese enfrentamiento político decisivo, tiene tres momentos diferentes.

La primera subetapa abarca desde el 6 de noviembre, cuando el término de la huelga generalizada produce una baja sustancial de la temperatura política, hasta el 15 de diciembre en que se recrudece el clima conflictual.

Ese primer momento coyuntural tiene un acontecimiento eje: la normalización de actividades. Inmediatamente después de la vuelta al trabajo, la Oposición acusa al Gobierno de violación de los acuerdos, porque algunos de los huelguistas eran sancionados por abandono de trabajo o por incitación al sabotaje durante el período de la huelga. De hecho esta temática de las represalias tiene repercusiones en algunos gremios provinciales. Estos, liderados por el Presidente de la Confederación de Dueños de Camiones, intentaron replantear el paro. Se hacen algunas amenazas de huelga generalizada a las que el Gobierno responde con dureza a través del General Prats, Ministro del Interior y Comandante en Jefe del Ejército.

Es evidente que el tema de las represalias no tenía la repercusión suficiente como para desplazar el centro de gravedad. Después de la crisis de octubre, la DC ve reafirmada su convicción respecto al carácter fundamental del enfrentamiento de marzo y, en general respecto a la primacía del conflicto institucional. Para ella, las elecciones le proporcionaban la oportunidad de probar su atracción popular y de masas, ganando fuerzas para imponer su línea al conjunto de la Oposición.

A su vez, el PN había comprobado el carácter prematuro de sus esperanzas de octubre, volviendo también sus ojos hacia la meta más próxima, las elecciones.

En general, la participación de los militares en el Gabinete es percibida por la Oposición como una garantía democrática, como la fuerza de contención que impediría la consumación de los desbordes totalitarios que se le imputaban a la UP. Por ello, los intentos extremistas de algunos sectores decepcionados por los resultados del conflicto gremial, fueron rápidamente acallados. Se había conseguido el objetivo fundamental: hacer posible las elecciones de marzo y acotar o limitar la acción gubernativa a través de la participación militar.

La mayor parte de los acontecimientos son leídos desde esa perspectiva por la Oposición. Así, el cuestionamiento de la UP de los resultados de la elección realizada entre los estudiantes secundarios, aduciendo que el triunfo habría sido suyo, o la negativa a realizar elecciones estudiantiles en la Universidad de Chile, son leídas como palpables pruebas de ese totalitarismo. Sólo la presencia de los militares garantizaba que esos comportamientos incipientes no se hicieran predominantes. Su participación generaba consenso, pese a que algunos aspectos parciales molestaban a la Oposición, sorprendida por una conducta en cierto modo inesperada.

Este clima se modifica a partir del 15 de diciembre donde se inicia un segundo momento de corta duración, que se extiende hasta principios de enero, cuyo centro son los ataques de la Oposición a los

militares. El clima consensual del primer momento se desvanece como por encanto y las críticas se estructuran en torno a dos ejes principales: se retoma la temática de las represalias para culminar a fines del mes con la aprobación de una acusación parlamentaria contra el Ministro de Hacienda como principal responsable de ellas; y más en general, se lanza una ofensiva política contra los militares por su ineficacia en limitar la acción de la UP dentro de los parámetros que la Oposición definía como legales.

Estas tentativas de desmistificar la acción de los militares, que al principio había sido definida como positiva, se intensifican como consecuencia de los violentos ataques del PS a Frei.

Esos ataques coinciden con una importante declaración del Gobierno, realizada por el General Prats, en que se aceptan una serie de reivindicaciones planteadas por la Oposición, entre ellas, aumentos de precios a los productos de la Papelera, reincorporación de profesionales despedidos de la Administración Pública.

La simultaneidad de ambos acontecimientos y la importancia que tiene desde el punto de vista político el comportamiento del PS, refleja el carácter contradictorio del momento y el carácter provisorio e inestable del arreglo político.

Es interesante anotar la diferencia de táctica entre la DC y el PN para tratar el problema de la participación de los militares en el Gabinete. Mientras la DC personaliza sus ataques a ellos, tratando de separarlos del resto de las FF.AA., el PN y los gremios insistieron sobre la ineficacia global de la gestión militar para alterar el carácter del Gobierno.

Esa diferencia táctica es reveladora, puesto que inicialmente la Oposición en su conjunto había alabado a los militares como garantía de elecciones democráticas. Olvidando esa definición inicial, el PN, como si deseara un inmediato desplazamiento del escenario del enfrentamiento, desde las arenas peligrosas de la lucha electoral hacia el campo del enfrentamiento directo, concentra sus ataques en los

Ministros militares. Hay que ver allí una táctica respecto a la resolución del problema militar: el PN quiere destigar a las FF.AA. de sus compromisos con el Gobierno, para que puedan asumir de nuevo su papel de alternativa de orden frente al conflicto generalizado y a la imposibilidad de obtener un consenso mínimo, incluso en vista al desarrollo de los comicios parlamentarios.

Esa línea refleja de nuevo la impaciencia de clase frente a lo que parece el avance irreversible de las estatizaciones. Sin embargo, ella no fue seguida, pues era prematura en una etapa cuyo sentido estaba dado por las elecciones en ciernes.

De hecho, desde comienzos de enero hasta la fecha prevista, la coyuntura se desenvuelve en torno a un eje principal: las elecciones. Para la Oposición los comicios de marzo tienen el carácter de un plebiscito. La DC espera que la demostración definitiva de su deterioro político obligue al Gobierno a rectificar. Su debilidad, en un momento de crisis del funcionamiento de la sociedad, de atomización interna, de desmovilización, permita que Allende pudiese imponer una línea de compromisos. Para el PN la derrota electoral del Gobierno debía significar el término del mismo, lo que se espera lograr por medio de una acusación constitucional por parte de la mayoría del nuevo Congreso que se elija en marzo. Los sectores juveniles del PN y Patria y Libertad son todavía más enfáticos en definir las elecciones como un poco más que un mero accidente. Cualquiera sea su resultado la lucha contra el marxismo debe continuar sin cuartel en otro estado.

Dentro de la Izquierda se dan los mismos matices. Aunque nadie espere una mayoría para la UP, Allende y el PC ven en las elecciones de marzo un momento decisivo, cuyo resultado compromete el desarrollo futuro del proceso de cambios. Para el PS es sólo una batalla más.

La UP enfrenta las elecciones de marzo en condiciones de deterioro con tres campos principales: los problemas de abastecimiento, la situación interna del bloque y la apertura de un nuevo frente, con la reapertura de otro, en el conflicto institucional.

Respecto al problema de abastecimiento el debate se centra en dos puntos principales. El primero tiene relación con el agravamiento de la escasez, la cual es causada tanto por las disminuciones de producción provocadas por el paro de octubre, como por la desarticulación general del mercado. Esta última es la consecuencia de la especulación y el mercado negro y de las ineficiencias del recién creado aparato estatal de distribución. Evidentemente que la multiplicación de las colas debido a la escasez, generaba una desarticulación de la vida familiar, obligaba a enormes esfuerzos para asegurar el abastecimiento de lo indispensable y también multiplicaba la sensación de dependencia y de inseguridad. El Gobierno acentúa durante esta coyuntura los esfuerzos para arreglar esta situación, siempre utilizando a las JAP como el principal instrumento de control y participación popular. Sin embargo, la gravedad de la situación de ese momento decisivo impulsa al Gobierno a anunciar un plan integral de control del problema, el cual incluye medidas de racionamiento.

El llamado "plan Flores" (nombre del Ministro de Hacienda) constituyó el segundo aspecto relevante del debate en torno al problema de abastecimiento. Aunque en él no se anunciaban medidas de implementación, y aunque se sospechaba que no estaban previstas, la simple enunciación provoca un largo debate.

Finalmente éste se zanja coyunturalmente con la creación de la Secretaría Nacional de Abastecimiento a cargo de un equipo de Oficiales.

El segundo nivel de deterioro corresponde a la unidad interna del bloque gobernante. Aunque es sabido que la discusión de concepciones generales respecto al desarrollo de la revolución chilena venía desde lejos, remontándose quizás a los orígenes de los dos grandes partidos de la Izquierda, hemos señalado que el triunfo del 70 había fortalecido el consenso. Así, surgen desacuerdos parciales, por ejemplo a propósito de las conversaciones con la DC entre febrero y junio del 72, o de los sucesos de Lo Herrinda en julio, pero sólo desde agosto de 1972 - como consecuencia del cambio de política económica detrás de la cual se percibe un cambio político global - esas discrepancias van

haciéndose sistemáticas, en el sentido de que se configura una concepción alternativa respecto a la dirección política de la UP. Entre julio y agosto del 72 esas diferencias globales salen a la luz a propósito de la llamada Asamblea de Concepción. El polo izquierdista, donde se agrupaba el MIR y parte del PS y del MAPU, se definió por primera vez en público a favor de otro modelo de transición al socialismo, en el cual la clásica estrategia bolchevique de la dualidad de poder debía jugar un papel central. Estas discrepancias sobre la conducción política del proceso y las alternativas estratégicas, se reflejan en el debate y la lucha por el poder interno en los partidos de la UP.

Ya más avanzada la disputa preelectoral se producen nuevas discrepancias. Una es el resultado incidental de la alianza electoral que habían aprobado el PS, la IC y el MIR. En una de las proclamaciones comunes de este frente se realiza una dura crítica de tono izquierdista a la UP, lo que produce un viva molestia entre los otros partidos y en Allende. Pero esa crítica revelaba una discrepancia respecto a los intentos de Allende de regularizar la situación del APS, donde incluso se contemplaba la devolución de algunas empresas consideradas casos especiales, además de la legalización de la situación global en esta materia. Tanto el PS como el MAPU se oponen tenazmente a esta iniciativa presidencial.

Estos intentos presidenciales de resolver el problema del APS mediante una legalización de lo actuado y aceptando para el futuro la imposición de un procedimiento institucional, tiene relación con la apertura de un flanco importante en la lucha por reivindicar la legitimidad legal. A partir de diciembre la Contraloría inicia una ofensiva legal contra las requisiciones ordenadas por el Gobierno. Así por ejemplo, falla en dos oportunidades contra la requisición de las empresas Fensa, Ferriloz, Cementos Bío-Bío. Ese fallo no significaba que el Gobierno debía volver atrás, puesto que podía acudir al procedimiento de insistencia con la firma de todos los Ministros. Sólo constituía un juicio en derecho, al cual habitualmente se le confería audiencia, sobre las atribuciones y la validez de los procedimientos empleados y de los preceptos jurídicos invocados. Pero era evidente que esta polémica con la Contraloría respecto a las requisiciones e

intervenciones podía generar una fuerte tensión en las relaciones con los Ministros Militares, puesto que los obligaba a avalar ciertas acciones discutidas del Gobierno, lo que renovaría la presión contra ellos de la DC y el PN. Esto era justamente lo que Allende quería evitar, tratando de mantener el equilibrio inestable del arreglo pro-ducido, por lo menos hasta las elecciones.

Al mismo tiempo se reabre durante esta coyuntura la polémica entre el Gobierno y el Poder Judicial. Los puntos de fricción son tres: 1) los fallos de algunos tribunales que limitan los poderes de gestión de los interventores nombrados por el Gobierno en algunas industrias y el fallo de la Corte Suprema respecto a la ilegalidad de requisición de una gran industria textil; 2) la polémica en torno al fallo de la Corte Marcial, donde, con el voto contrario de los jueces militares, se rebaja de 20 a 2 años la pena contra el ex-General Viaux por el atentado al Comandante en Jefe del Ejército en octubre de 1970; 3) la encargatoria de reo dictada por la Corte de Apelaciones, contra un funcionario estatal encargado de la fiscalización al comercio y contra el Ministro Secretario General de Gobierno por haber dipuesto cadena obligatoria de radios durante la crisis de octubre.

El cerco institucional contra el Gobierno se estrechaba a cada momento un poco más. Al mismo tiempo, como al margen de la disputa electoral, perfectamente rutinada y reglamentada, se desarrolla otro enfrentamiento que parece estar aparte y desligado del anterior: el recrudecimiento de la violencia, no ya en la forma de violencia de masas, -la cual dentro de ciertos límites formaba parte de esa misma rutina electoral, sino en la forma de violencia terrorista por parte de grupos opositores. Enero y febrero estuvieron plagados de atentados a bomba, de sabotaje a instalaciones de electricidad, de asaltos e incendios contra camionetas fiscales.

Esos hechos, aparentemente irracionales, demuestran la existencia de un doble ritmo de la coyuntura. Uno que se orienta hacia marzo, otro que prepara las condiciones para después. Quizás los autores de estos atentados todavía esperaban que el Gobierno o sus partidarios decidieran lanzarse a responder la violencia con la violencia, cam-

biando el campo de enfrentamiento, lo que obligaría a actuar a las FF.AA.

Los resultados de la elección parlamentaria del 4 de marzo provocan un terremoto político. La Oposición, pese a sus diferentes matices, era unánime para asignarle a las elecciones un carácter plebicitario, partiendo de la base que ella reflejaría un enorme retroceso político del Gobierno. En la práctica los resultados electorales reproducen la situación de empate que habían mostrado los comicios municipales de 1971.

La UP disminuye su votación en aquella fecha, donde alcanza el 49,8%. Sin embargo, después de tres años de Gobierno en que su intención de transformar revolucionariamente la sociedad chilena había hecho estallar una crisis, obtiene un 43,4%, disminuyendo sólo en 6,14% su presencia en el electorado. Si los resultados se comparan, no de acuerdo al total de votantes, sino de acuerdo al total de inscritos, lo que permite anular los efectos de las abstenciones diferenciales (25,2% en 1971 y 18,8% en 1973), la diferencia entre ambas elecciones es sólo de 1,1%. En todo caso, cualquier sea la base de cálculo elegida, los resultados no son políticamente significativos para la estrategia de la Oposición. Estos resultados no le permiten la mayoría necesaria para acusar constitucionalmente al Presidente y obtener su renuncia mediante un recurso constitucional, ni tampoco le sirven para obligar a la UP a la transacción imputándole un profundo debilitamiento de masas.

Dentro de ese marco, a la DC en particular tampoco le sirve haber aumentado su distancia frente al PN en un 0,4 puntos. Esto sucede, en parte, porque este último también crece -aunque menos que su aliado- respecto a las elecciones del 71 pero sobre todo porque la estrategia política de la DC estaba estructurada en base al resultado electoral. Al mantenerse el empate comienza el caso de esa línea política.

En el período pre-electoral la DC estructuró su discurso una vez más - en torno al doble principio de oposición: contra los intentos sediciosos y contra el totalitarismo del Gobierno. La función política

de la DC como organización sería evitar la polarización, porque un esquema de dos bloques enfrentados destruiría el equilibrio político.

Una vez más la DC intenta jugar en una situación de enfrentamiento político agudo, el papel de un centrismo que se desplaza desde la derecha hacia la izquierda, pero siempre con un movimiento pendular incompleto: esto es sin abandonar el campo de la Oposición. El alternativismo ideológico y la dirección del partido por parte de los sectores más permeables a la UP, mantienen a la DC en la incómoda postura de un centro que siente la nostalgia de haber perdido su posición céntrica y que está siempre dispuesto a compensar su alianza con la Derecha mediante algunos pasos hacia la Izquierda. Para la DC este ejercicio termina cuando ya era demasiado tarde.

2. DE LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS AL ALZAMIENTO DEL 29 DE JUNIO (Marzo - Junio 1973)

Después de las elecciones comenzó la última coyuntura de mediación de fuerzas o de reajustes. Este tipo de fases, que hemos llamado de interludio, siempre se producía después que un acontecimiento importante había modificado el campo político.

Los ejes de esta coyuntura son: 1) el conflicto por la Escuela Nacional Unificada; 2) el conflicto por la formación del APS y 3) el desarrollo de formas nuevas de organización popular.

Hasta fines de abril el problema de la ENU es el conflicto predominante. El conjunto de reformas sobre el sistema educacional que se contenían en el Informe sobre la Escuela Nacional Unificada pretendían, según los sectores de la UP que lo apoyaron con más fuerza, un conjunto de objetivos de mejoramiento técnico y de democratización de la enseñanza. Entre las primeras estaba la adopción del principio de la educación poliécnica que permitiría -según sus

promotores—la ruptura de las barreras impuestas por la especialización estrecha, la combinación de enseñanza teórica y práctica, de estudio y trabajo productivo, mediante la cual se esperaba superar progresivamente la división entre trabajo intelectual y manual; la racionalización del sistema educativo—tanto en materia de recursos como respecto a la relación entre medio de vida y medio estudiantil— a través de la creación de complejos educacionales, articulados a la vida del barrio o de la población.

Entre los segundos estaba la creación de un sistema único de enseñanza, en el que se esperaba que todos tendrían oportunidades iguales y recibirían la misma educación, y la quiebra del elitismo universitario, pues también se podría acceder a la enseñanza superior desde el campo del trabajo. El lenguaje de la exposición del proyecto, a diferencia de su contenido mismo, era de tono altamente ideológico. Es de este aspecto que se servirá la Oposición para atacarlo.

Este proyecto, cuyos fundamentos centrales habían sido aceptados y aprobados por representantes de sectores educacionales y de organizaciones sociales de la Oposición en el Congreso Nacional de Educación de diciembre de 1971, despierta ahora una intensa campaña de agitación. Al principio las baterías de la Oposición estuvieron centradas en aspectos técnicos, más tarde en la presunta inconstitucionalidad del proyecto y de los procedimientos. Más adelante los fuegos se concentran en el contenido ideológico del proyecto, donde se expresarán, a juicio de la Oposición, las pretensiones totalitarias de la UP y el absoluto predominio ideológico marxista-leninista. El desenlace del conflicto era impreciso hasta que el pronunciamiento de algunos oficiales generales, principalmente de la Armada, y de la Iglesia lleva al Gobierno a retirar el proyecto.

El retiro del proyecto de la ENU genera fuertes críticas en los sectores del polo izquierdista. Estos, aunque reconocían la imposibilidad de imponerlo burocráticamente, sin una completa discusión, ven el retiro, por imposición del bloque opositor y con la complicidad de las fuerzas más moderadas de la UP, un síntoma de retroceso político.

La importancia del conflicto de la ENU es lo que permite a la Oposición una ofensiva en el campo ideológico, tocando allí los puntos sensibles de dos actores claves a los que no había podido arrastrar hasta el momento a su estrategia: las FF.AA. y la Iglesia.

Durante esta coyuntura recrudescen el conflicto a propósito del APS. Dos son los incidentes principales, ya casi definitivos, de esa lucha parlamentaria e institucional que había comenzado a fines de 1971. El primer incidente motivado por el decreto de insistencia enviado por el Ejecutivo, ya sin la presencia de Ministros Militares, como veremos más adelante, para la requisición de 55 industrias cuya legalidad había sido cuestionada por la Contraloría. El Gobierno le otorga a este acto un carácter puramente administrativo, mientras que el bloque opositor ve en él una nueva comprobación de los deseos del Gobierno de continuar las reformas por la vía extra parlamentaria.

El segundo incidente en este conflicto se origina en la respuesta de la DC ordenando a sus parlamentarios poner en tabla la discusión sobre los vetos del Ejecutivo al proyecto sobre las áreas de la economía. Esta discusión había quedado paralizada en agosto de 1972 al percibirse el impasse jurídico entre la posición de Allende, que implicaba la promulgación parcial de la reforma constitucional, y la opinión de los opositores para los cuales sólo era posible una promulgación total o un plebiscito. En mayo estos temas vuelven a suscitarse. El Congreso rechaza ya definitivamente los vetos presidenciales y el problema queda entregado a la decisión del Tribunal Constitucional, el cual a fines de ese mes se declara incompetente.

La incompetencia del Tribunal Constitucional respecto a la legalidad del procedimiento usado por el Congreso al rechazar por simple mayoría los vetos a una reforma constitucional como la que estaba en discusión—cuando en el caso de una ley normal se exigía los dos tercios—, significaba para el Gobierno una grave derrota legal y política. El conflicto desencadenado carecía desde entonces de un arbitraje institucional. No le quedaba al Gobierno sino imponer su

tesis de la aprobación parcial o apelar al plebiscito (15).

El tercer acontecimiento —eje de esta coyuntura— es el desarrollo de formas nuevas de organización popular, cuyo origen se situaba en la crisis de octubre.

A partir de esa crisis empiezan a aparecer en diferentes partes del país una serie de organizaciones como los Comandos Comunales y los Cordones Industriales. Los primeros aglutinan por un principio territorial a todas las organizaciones de base; los segundos están más directamente ligados al aparato productivo, aunque también operan con un principio espacial que liga a varias unidades productivas. La lógica de esas nuevas formas organizacionales, en torno a las cuales giró el debate sobre el Poder Popular, es triple: a) ellas permiten nuclear a los trabajadores sobre una base territorial, facilitando la organización, la movilización y la coordinación de las actividades; b) son formas de organización que parecen corresponder a las nuevas necesidades políticas, pues el principio territorial permite que realicen con relativa eficacia tareas de defensa del Gobierno; c) son estructuras que permiten producir, desde la base, la unidad interpartidaria que cada vez se hace más difícil en la cúpula.

En un principio, el desarrollo de esas organizaciones no tradicionales es impulsado por el polo izquierdista, porque corresponde a su teoría del poder popular alternativo. El problema suscitado en un pequeño pueblo del Sur, Constitución, es sintomático. Allí el Coman-

(15) *Recordemos que la Reforma Constitucional sobre las áreas de la economía fue presentada por dos Senadores DC, Hamilton y Fuentealba, como respuesta a la política de expropiaciones del Gobierno, el 20 de Octubre de 1971. Su tramitación duró 18 meses. Aprobado por el Congreso Pleno, en Febrero de 1972, el Presidente veió el Proyecto. El Congreso rechazó algunos votos por mayoría, produciéndose el conflicto con el Ejecutivo. Al declararse incompetente el Tribunal Constitucional argentino que se trataba de una Reforma Constitucional sobre la que no tenía capacidad de juicio, el Presidente promulgó parcialmente el proyecto, lo que fue rechazado por la Contraloría.*

do Comunal de Trabajadores ocupa simbólicamente la ciudad, en protesta contra los representantes del Gobierno central. En el acto se expresa una línea política, para la cual la única solución estratégica consistía en el despliegue de la iniciativa popular, aunque esta se pronunciara contra el Gobierno. Durante esta coyuntura ese tipo de movilizaciones son frecuentes. Todavía las nuevas organizaciones, a través de las cuales se pretende realizar la unidad con la acción de los trabajadores, son la expresión del grave conflicto estratégico que azotaba a la UP.

Este hecho impidió comprender el complejo carácter de estas organizaciones que unían un principio de defensa del consumo de las fuentes de trabajo ante el boicot patronal con una fuerte radicalización ideológica que reivindicaba para los sectores populares el rol de sujetos de la historia. El tema del poder popular, promovido tanto por sectores de la UP como de la Oposición, oscureció la significación real de esta movilización popular que al principio desbordaba a las organizaciones tradicionales. En todo caso, el desarrollo de estas nuevas organizaciones adquiere pronto un carácter autónomo de los conflictos internos de la UP. Entonces ellas son impulsadas por los sectores de ésta.

El conflicto interno de la UP se refleja en esta coyuntura con la división de uno de sus partidos (el MAPU), cuya significación reside en que revela, primero, un alto grado de descomposición dentro la UP y, segundo, un intento fallido de reagrupación general del bloque

Las temáticas centrales de esta coyuntura, en cuyos términos son leídos todos los acontecimientos, son la denuncia por parte del Gobierno del fascismo y de la posibilidad de una guerra civil y las declaraciones reiteradas de la Oposición sobre el carácter ilegal del Gobierno.

La violencia desencadenada en esta coyuntura, tanto en la forma de violencia de masas, suscitada a propósito de la ENU o de la huelga, provocada por la Oposición, del establecimiento cuprífero de El Teniente, o en la forma de terrorismo, ilustraba sin discusión la

situación amenazante que denunciaba el Gobierno. Sin embargo, ni siquiera la DC parece sensible a los peligros.

La razón de esta impermeabilidad es que la polarización había cumplido su ciclo dentro de ese partido. En el mes de mayo, la dirección centrista debe abandonar el timón en manos de la derecha partidaria.

El sentido de esta coyuntura es entonces, la preparación de un enfrentamiento definitivo, sin que haya claridad ni consenso en la UP sobre el carácter específico del mismo y sobre las respuestas posibles. La movilización de masas que invadió el escenario durante octubre del 72, tiene en esta fase un rol secundario. El incidente principal en este terreno es la huelga de trabajadores de El Teniente con una duración de 75 días. Ese conflicto es grave para la UP por tres razones: a) por las consecuencias económicas que acarrea la paralización del segundo mineral de cobre del país; b) porque el bloque opositor había logrado movilizar clase obrera en uno de los ámbitos políticos más importantes del PS, lo que representaba un avance para ese bloque respecto a octubre del 72; y c) porque durante el conflicto se generaron formas de acción común entre esos obreros y los estudiantes ultra derechistas de la Universidad Católica, lo que demuestra que había sectores muy minoritarios pero estratégicos de la clase obrera que también se alineaban en la perspectiva del derrocamiento.

Pero fuera de esa movilización importante y de la violencia, en diversas formas, que permanecía como un rasgo constante, la coyuntura tiene un desarrollo secreto, que no aparece ante los ojos del público, y que explica la menor intensidad de la lucha en el escenario: la pugna por atraer a las FF.AA. Todos los temas del bloque opositor se dirigen hacia ese objetivo o -por lo menos- se orquestan con él.

Así en la mañana del 29 de junio se produce el alzamiento de la más importante unidad blindada de Santiago, cuyos tanques rodean el edificio de la sede del Gobierno y atacan el Ministerio de Defensa. Aunque desde el principio el intento golpista estaba abortado, porque la unidad rebelde había quedado aislada, el Comandante en Jefe del

Ejército debió encabezar personalmente el contra ataque, movilizándolo las fuerzas militares disponibles. Las conexiones de este intento militar con grupos civiles quedó demostrada con el asilo político del dirigente máximo del movimiento Patria y Libertad y con las declaraciones de otros dirigentes de ese movimiento.

¿Cuál es el significado político y militar de este intento fracasado? Es evidente que aún hoy día es muy difícil conocer el papel exacto que él juega dentro del diseño global, sobre todo si se piensa que después del golpe militar del 11 de septiembre, los dirigentes de este último lo han criticado desde el punto de vista de la impaciencia que revelaba y del respeto a los canales regulares de las FF.AA. Sin embargo, el desarrollo de este alzamiento permite señalar algunos puntos.

En primer lugar, la no existencia de una fuerza militar propia de la UP, capaz de enfrentar a cuerpos regulares del Ejército. Durante las horas de tensión en que las tropas rebeldes ocupaban las calles sin que ningún destacamento profesional móvil les hiciera frente, sólo recibieron la oposición de francotiradores dispersos y de la guardia de carabineros parapetada de la sede de Gobierno.

En segundo lugar, revela el exacto papel que juegan los cordones industriales, como lugar de nucleamiento, organización y coordinación, como ámbito de fortalecimiento emocional e ideológico. Seguramente a muchos llamó la atención la ausencia de organización armada popular. Los relatos de militantes y dirigentes de los Cordones revelan, más allá de la convicción y la valentía personal que reflejaban, la absoluta carencia de medios para enfrentar una lucha armada.

Sin embargo, eso no quiere decir que ese tipo de organizaciones carecieran de significación. Todo lo contrario, el día 29 despliegan una enorme labor de agitación, de vigilancia y de inteligencia, detectando los movimientos en torno a las industrias y barrios obreros. Al mismo tiempo, los Cordones y los Consejos Comunales sirven como base en los meses siguientes para una ofensiva de tomas

de industrias y de desarrollo de una organización económica de emergencia, donde se perfecciona y se masifica lo aprendido durante la crisis de octubre.

Pero es evidente que tanto los Cordones como los Consejos Comunales representaban importantes organizaciones de retaguardia, útiles para tareas políticas y para procurar la máxima normalidad en la producción y el abastecimiento y para la defensa de determinados emplazamientos. Ellas tendrían una enorme importancia militar sólo si se dividían las FF.AA. De nuevo el debate planteado en la Unidad Popular sobre el poder popular y por la Oposición sobre el poder armado paralelo impidió ver la realidad de estas organizaciones.

El alzamiento de fines de junio demuestra así el carácter dependiente de la política militar de la UP y aclara definitivamente un aspecto en el cual el General Prats insistía: las FF.AA. no podían correr el riesgo de hundir al país en una larga guerra civil. Este episodio comprueba, pese al carácter cómico e irrelevante que trató de asignarle el bloque opositor, que no habría guerra civil si las FF.AA. procedían según fórmulas de consenso.

La lucha por atraer a los militares estaba desencadenada desde octubre. En ese terreno la UP parecía tener una gran ventaja: la legitimidad jerárquica jugaba en general a su favor. Sin embargo, la UP no capió el deterioro a que ella estaba sometida, por cuanto el Gobierno esperaba todo el respaldo de los oficiales y de los soldados pero las condiciones políticas creaban dificultades para afirmar el mando militar.

Esto último se había expresado el 27 de marzo, después de las elecciones, cuando el Presidente reorganizó su Gabinete sobre la base de militantes de los partidos, prescindiendo de la colaboración militar. La decisión fue tomada según el criterio, expresado por el Alto Mando, de que la participación en el Gobierno deterioraba la corrección interna en las FF.AA. Para continuar en el Gabinete, ellas necesitaban plantear exigencias respecto al curso político, que per-

mitieran también un plan orgánico de colaboración. La UP enfrentó otra vez la disyuntiva del compromiso.

Ese tipo de colaboración despertaba el máximo de reticencias en la UP. Dos eran las razones principales: a) desde fines de octubre de 1972 había habido un gran desarrollo de las tendencias izquierdistas dentro de la UP, tanto en la cúpula -aglutinaban a la dirección del PS, de la IC, del MAPU y tenían el apoyo del MIR— como en sectores de base, que veían en los resultados electorales una posibilidad de avance y no de retroceso y reivindicaban una línea que acudía a las energías de la masa en vez de descargar el peso de la solución en las astucias de los altos dirigentes; b) la colaboración con los militares despertaba más sospechas que los acuerdos con la DC, pues se trataba de una fuerza que, llegado el momento, podría imponer sus condiciones.

En vista que reproducir la colaboración con los militares en un nuevo nivel cualitativo agudizaba los conflictos o las contradicciones en la UP, pues la mayoría de esta no quería modificar lo que se creía era el avance socialista, el Presidente decidió retirarlos del Gobierno. Si el desenlace no estaba escrito desde antes, quizás se comenzó a escribir en ese momento.

Finalmente, el alzamiento del 29 de junio revela datos importantes respecto al estado ideológico de la oposición, algunos de cuyo sectores claves estaban implicados en él. Pese a que se producen por parte de la DC, declaraciones de apoyo al régimen constitucional, el bloque opositor en su conjunto se niega a darle al incidente la importancia que merecía. Así rechaza la dictación de una ley de Estado de Sitio, sin la cual el Gobierno no tenía instrumentos legales para desarmar los dispositivos civiles del golpe.

La legitimidad democrática estaba fuertemente deteriorada. Para mucha gente, ferviente o aparentemente democrática hasta entonces, este régimen había perdido su sentido, o habían llegado a creer que la defensa de la democracia requería un cambio de Gobierno. La intensidad de la lucha política iba incubando un desprecio irracional y

pasional hacia el adversario, una odiosidad que justificaba la violencia y el terrorismo. Se asistía efectivamente a un clima de expansión de una ideología autoritaria.

3. DEL ALZAMIENTO DEL 29 DE JUNIO AL DERROCAMIENTO DEL GOBIERNO (Julio - Septiembre 1973).

La última coyuntura está definida por el largo desenlace que va desde el 1º de julio hasta el 11 de -septiembre. Los ejes principales son: a) el deterioro de la situación militar de la UP; b) el nuevo diálogo con la DC y c) el comienzo de una nueva huelga de los gremios patronales.

Las relaciones entre las FF.AA. y el Gobierno entran durante esa fase en una rápida declinación. Cuatro son los acontecimientos y al mismo tiempo los factores de aceleración de este proceso: 1) la visible y pública pérdida de legitimidad de la máxima jerarquía militar; 2) el fracaso del nuevo Gabinete con participación militar; 3) la aplicación de la Ley de Control de Armas contra las organizaciones de la UP; 4) la denuncia por parte del Almirantazgo de un plan izquierdista de infiltración en la Armada.

El día anterior al del alzamiento fracasado de junio, el General Prats, Comandante en Jefe del Ejército, se vio envuelto en un incidente al ser provocado desde un automóvil que viajaba en paralelo al suyo, con manifestaciones en su contra por parte del público que se congregó.

Esto constituía el primer clímax de un proceso que llevaba a desprestigiar a la principal jerarquía militar. En las fases previas a octubre, el PN y su prensa hicieron a las FF.AA. en su conjunto el blanco de sus ataques; más adelante la DC cenó sus fuegos en el General Prats buscando mostrar que su conducta no era representativa. El PN recapacitó y al mismo tiempo que hacia llamamientos mesiánicos a las FF.AA., criticaba su participación en el Gobierno, como un baldón dentro de una trayectoria imaculada.

Cuando se demostró que la influencia de la jerarquía máxima militar era determinante en la línea de defensa del Gobierno asumida hasta entonces, comenzó una campaña de desprestigio in crescendo contra ella, la que se agudizó después de marzo y sobre todo después del 29 de junio. Ese incidente callejero llevó a posteriores incidentes planificados, como concentraciones frente al Ministerio de Defensa y frente a la casa particular del Comandante en Jefe.

Este deterioro de la legitimidad jerárquica, que estaba provocando una crisis de las líneas de mando y la subordinación abierta de algunos generales, llevaron a Prats a presentar su renuncia el 23 de agosto.

Después del fracaso de las conversaciones postreras con la DC, y poco antes de esta dimisión, Allende vuelve a recurrir a las FF.AA. con el objeto de paralizar la nueva ofensiva huelguística de los gremios. Sin embargo, ese Gabinete de emergencia dura corto tiempo. El primer traspás es la renuncia a su cargo ministerial del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, el General Ruiz. Allende, decidido a forzar la lealtad constitucional debida, lo obliga a pasar a retiro. Evidentemente que los motivos aducidos por el jefe militar no son el factor decisivo sino sólo un detonante. El conflicto aparente se suscita a causa de las limitaciones políticas que el General Ruiz habría encontrado en el desempeño de su labor. Sin embargo, es evidente que esa renuncia tenía otras implicancias, así como es evidente que la dimisión de Prats fue el reconocimiento explícito de cambios decisivos de la correlación de fuerzas en el Alto Mando. La UP no supo o no quiso interpretar en su justa significación ese mensaje.

El otro campo en que se muestra el deterioro de la situación militar de la UP es en la aplicación de la Ley de control de armas. En realidad esa disposición había sido aprobada en julio de 1972, por iniciativa de un senador demócratacristiano, pero sólo había empezado a ser aplicado en gran escala después de las elecciones de marzo de 1973. Aún mientras el General Prats era Comandante en Jefe, esa disposición fue utilizada de preferencia para pesquisar armas en manos de la

Izquierda sin afectar a las organizaciones de derecha. Esto revela las presiones internas a que estaba sometido.

En todo caso los incidentes provocados por los allanamientos militares de fábricas o de fundos aumentaban las protestas de los partidarios de izquierda, y los llamamientos a los soldados para que desconocieran lo que los primeros consideraban órdenes sediciosas. Incluso, el allanamiento producido en Punta Arenas, el 4 de agosto en el cual encuentran la muerte dos obreros, da lugar a una áspera polémica entre Prats y el PS y el MIR, a la cual se suma también la Comandancia de la FACH. El día anterior se había producido otro allanamiento en el Cordón Cerrillos, respecto al cual también se levantaron quejas. Alguna prensa de izquierda empieza a preguntarse, si detrás de las acciones incriminadas no existiría la intención de preparar psicológicamente un posible enfrentamiento.

Durante esta misma semana, la Armada denuncia un plan de infiltración dirigido por el PS y el MAPU anunciando la detención de numeroso personal de tropa. El MIR y alguna prensa de izquierda denuncian que los suboficiales y marineros acusados se habían negado a cumplir órdenes de allanamiento y habrían advertido que no participarían en un golpe de estado.

A mediados del mes de agosto, en que se precipita el llamado a retiro del Comandante en Jefe de la FACH, las acusaciones de la Armada sobre infiltración política y las manifestaciones contra Prats, ya existe prácticamente en algunos terrenos una dualidad de poder. Tanto en relación con los allanamientos como en relación con el problema de los marineros procesados, el Gobierno se encuentra incapacitado de acción autónoma. Para el Gobierno la situación se agrava a partir del 23 de agosto, cuando las grandes líneas futuras parecen diseñarse con nitidez.

Esta situación de descomposición acelerada está relacionada también con un hecho anterior, el nuevo fracaso de las conversaciones con la DC. Esas conversaciones, que fueron promovidas por el Presidente y por el Cardenal en un esfuerzo por conseguir alguna

fórmula de arreglo, se realizan en medio de una fuerte ofensiva política de la Derecha que, entre otras cosas, acusa al Gobierno de fraude electoral en las elecciones de marzo con el fin de deslegitimar otro pilar básico de la institucionalidad política como eran las elecciones. También se realizan en un ambiente de violencia acelerada que es desatado por los sectores más extremos de la Oposición: sólo en el mes de julio se producen alrededor de 140 atentados de diferentes tipos, incluido el asesinato de un Edecán del Presidente. Para acompañar este clima se desencadena una nueva huelga de transportistas, que es seguida por gremios y Colegios Profesionales, con un carácter explícito de definitivo y con llamamiento a las FF.AA. y campañas públicas para obtener la renuncia del Presidente. El clima político llegaba a su punto de tensión más alto.

A su vez, estas conversaciones desencadenan fuertes polémicas dentro de la Izquierda y entre los dirigentes obreros de base de los Cordones y Comandos Comunales, de creciente expansión y movilización en esta fase. Las críticas más duras son las del MIR. Para éste las conversaciones son parte de la táctica del sector freista de la DC, la cual consiste en ir progresivamente cercando al Gobierno, sembrando el desconcierto y la desconfianza en su interior, pero sin un interés real por llegar a acuerdos. El Secretario General del MIR llama a esto la táctica del emplazamiento, cuya característica sería una radicalización progresiva de las exigencias.

En verdad esta descripción correspondía esta vez al desarrollo de las conversaciones. Las bases de acuerdo planteadas por la DC entonces son mucho más draconianas que las de hacia un año. Exigía un reconocimiento público del Gobierno de haber actuado al margen de la legalidad y la formación de un Gabinete de Garantías, sin representantes de los partidos marxistas, y donde los cargos fundamentales estuvieran en manos de uniformados.

El fracaso de estas conversaciones destinadas a buscar un consenso mínimo es una demostración de su carácter ficticio, porque los límites de flexibilidad de cada bloque eran demasiado estrechos para hacer posible una negociación. La DC tenía que hacer imposible la nego-

ciación o, lo que es lo mismo, a través de ella tratar de cambiar radicalmente el carácter del Gobierno, para no ser arrasada por el PN en la disputa por la dirección del bloque y perder toda influencia en él. La Izquierda no podía aceptar concesiones que alteraran radicalmente el carácter del Gobierno, porque se quebraba definitivamente tanto su bloque político como su base social de apoyo.

Después del fracaso de estas conversaciones, como se ha dicho, Allende intenta recomponer la situación mediante el Gabinete con participación de los tres Comandantes en Jefe. Sin embargo, esa fórmula en vez de normalizar la situación, como en octubre de 1972, desencadena un deterioro creciente que culmina con la dimisión del General Prats. En octubre los militares podían concebir esperanzas respecto a la trascendencia política de su papel, mientras que en agosto de 1973 saben que el Gobierno no está dispuesto a cambiar el carácter de su acción política y que los llama para que enfrenten la sedición desencadenada.

Entretanto, se había demostrado que la crisis política no tenía solución y también se había desarrollado en el interior de las FF.AA. la crítica a las posiciones constitucionalistas. Quizás sea el discurso del General Canales, llamado a retiro en septiembre de 1972, el que mejor expresa el contraproyecto militar en ciernes: gobierno autoritario, fuerte e impersonal, que debe ser realizado por aquella fuerza que constituye la reserva moral de la nación. El constitucionalismo era visto ahora como la aplicación abstracta de una doctrina a una situación que no podía definirse en esos términos, porque el Gobierno de Allende, para esta concepción, había dejado de ser legal hacía mucho tiempo.

De ese modo, el retorno de los militares en vez de apaciguar los conflictos políticos los agudiza, exacerbando las contradicciones dentro de las FF.AA. El 22 de agosto, el Parlamento pronuncia la ilegalidad del Gobierno: era un rito necesario, pero las decisiones estaban tomadas fuera del recinto parlamentario.

En ese campo de fuerzas, donde el elemento fundamental son los

militares, la agitación de los gremios de transportistas y comerciantes que rebrota durante ese período no tiene una importancia decisiva. Es la simple música de fondo. Pero está diseñada para mantener la visión y el clima de un país en caos en espera de sus salvadores.

La sorprendente parálisis política de la UP y del Gobierno durante esta última fase crucial revela tanto la magnitud de las contradicciones existentes en su interior, como el grado de su dependencia respecto de los militares, a los que algunos, a falta de otra esperanza, todavía suponían leales.

Hasta el final primaron la visión de la imposibilidad de cualquier compromiso y las esperanzas de enfrentar con éxito una guerra civil no buscada ni deseada sin tener para ello Ejército propio y presenciado día tras día la disolución de la influencia en las FF.AA. En realidad, el retiro de Prats había significado la desaparición del último obstáculo para conseguir la unidad interna en torno a una alternativa legal. Cuando este último acto del climax se consuma, ya todo estaba escrito. El Gobierno, abandonado a su sola legitimidad constitucional y a un significativo pero impotente apoyo popular, no podía enfrentar una guerra que sus promotores sabían unilateral.

